



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2005/6/Add.1
19 de noviembre de 2004

ESPAÑOL

Original: ESPAÑOL/FRANCÉS/
INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
61º período de sesiones
Tema 11 b) del programa provisional

**LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR
LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON
LA TORTURA Y LA DETENCIÓN**

Opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

El presente documento contiene las opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en sus períodos de sesiones 38º, 39º y 40º, celebrados en noviembre y diciembre de 2003, en mayo de 2004 y en septiembre de 2004, respectivamente. En el informe que el Grupo de Trabajo presenta a la Comisión de Derechos Humanos en su 61º período de sesiones (E/CN.4/2005/6) figura un cuadro con la lista de todas las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo y los datos estadísticos correspondientes.

ÍNDICE

	<i>Página</i>
Opinión N° 19/2003 (Tailandia)	4
Opinión N° 20/2003 (Viet Nam)	5
Opinión N° 21/2003 (China).....	9
Opinión N° 22/2003 (Argelia)	12
Opinión N° 23/2003 (China).....	16
Opinión N° 24/2003 (Israel)	19
Opinión N° 25/2003 (China).....	24
Opinión N° 26/2003 (China).....	25
Opinión N° 1/2004 (Marruecos)	28
Opinión N° 2/2004 (Georgia)	29
Opinión N° 3/2004 (Israel)	31
Opinión N° 4/2004 (Etiopía).....	37
Opinión N° 5/2004 (Viet Nam)	39
Opinión N° 6/2004 (República Árabe Siria).....	40
Opinión N° 7/2004 (Emiratos Árabes Unidos).....	43
Opinión N° 8/2004 (República de Moldova).....	45
Opinión N° 9/2004 (Myanmar).....	48
Opinión N° 10/2004 (Malasia)	51
Opinión N° 11/2004 (Madagascar).....	54
Opinión N° 12/2004 (Estados Unidos de América).....	56
Opinión N° 13/2004 (Bolivia)	57
Opinión N° 14/2004 (China).....	61
Opinión N° 15/2004 (China).....	62

ÍNDICE *(continuación)*

	<i>Página</i>
Opinión N° 16/2004 (Myanmar).....	66
Opinión N° 17/2004 (Estados Unidos de América).....	68
Opinión N° 18/2004 (Estados Unidos de América).....	69
Opinión N° 19/2004 (Viet Nam)	73

OPINIÓN N° 19/2003 (TAILANDIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 18 de junio de 2003

Relativa a Abdelkader Tigha

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de conformidad con los métodos de trabajo adoptados por él y con el fin de llevar a cabo su tarea con discreción, objetividad e independencia, transmitió al Gobierno la comunicación mencionada *supra*, recibida y considerada admisible por el Grupo, relativa a la denuncia de que se ha producido una detención arbitraria.
2. El Grupo de Trabajo toma nota con reconocimiento de la información que le ha transmitido el Gobierno interesado con respecto al caso de que se trata dentro de un plazo de 90 días contado a partir de la transmisión del caso por el Grupo de Trabajo.
3. El Grupo de Trabajo también toma nota con reconocimiento de la información recibida de la fuente, en la que se afirma que Abdelkader Tigha ya no permanece detenido, que abandonó Tailandia el 22 de septiembre de 2003 y que se encuentra actualmente en Jordania.
4. Habiendo examinado toda la información disponible, y sin determinar el carácter arbitrario o no de la detención, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso de Abdelkader Tigha conforme a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo revisados.

Aprobada el 27 de noviembre de 2003

OPINIÓN N° 20/2003 (VIET NAM)

Comunicación dirigida al Gobierno el 28 de mayo de 2002

Relativa a Thadeus Nguyen Van Ly, sacerdote católico

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue creado en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos, la cual precisó el mandato del Grupo en su resolución 1997/50 y lo prorrogó mediante su resolución 2003/31. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación mencionada *supra*.
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno por haber facilitado la información relativa al caso.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - i) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - ii) Cuando la privación de libertad resulta de un enjuiciamiento o una condena por el ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - iii) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados Partes es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad, en cualquier forma que fuere, un carácter arbitrario (categoría III).
4. Habida cuenta de las denuncias presentadas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente, la cual facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que, habida cuenta de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a esas denuncias, está en situación de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias al caso.
5. Según la información recibida, Thadeus Nguyen Van Ly, ciudadano vietnamita, sacerdote católico, profesor del Seminario Cristiano de Hue y antiguo secretario del Obispo de Hue, fue detenido el 17 de marzo de 2001 en la provincia central de Thua Thien-Hue por agentes de policía, en cumplimiento de una orden dictada por el Comité Popular Ejecutivo de la provincia, por su supuesto "incumplimiento de las decisiones que acerca de su libertad vigilada adoptaron los organismos oficiales autorizados". Se afirma que en el momento de su detención la policía hizo uso excesivo de la fuerza y arremetió contra varios feligreses. Los agentes de policía estaban armados con látigos eléctricos, rifles y pistolas. El padre Ly acababa de publicar en

Internet una declaración sobre la situación de los derechos humanos y la libertad religiosa en Viet Nam. Se dijo que, aunque dicho documento gozaba de amplia difusión internacional, era improbable que fuera leído por la mayoría del pueblo vietnamita.

6. En diciembre de 1983, el padre Ly fue condenado a una pena de prisión de diez años por "oponerse a la revolución y destruir la unidad del pueblo". Anteriormente había pasado un año en prisión (de 1977 a 1978) sin que se formularan cargos o se celebrara un juicio contra él. Entre mayo de 1983 y junio de 1992 pasó otros nueve años en prisión, en lugares de deportación y en campos de trabajos forzados. Tras su puesta en libertad permanecía bajo la estricta vigilancia de la policía.

7. Las autoridades detuvieron por primera vez al padre Ly en 1977, tras haber distribuido éste ejemplares de una carta del obispo en la que se criticaba las detenciones de monjes budistas y la supuesta intolerancia religiosa que reinaba en Viet Nam. En noviembre de 1994 el padre Ly publicó una "declaración de diez puntos sobre la situación de la Iglesia católica en la diócesis de Hue", en la que se criticaba la supuesta apropiación por el Estado de bienes eclesiásticos, la intromisión del Estado en las enseñanzas de la Iglesia y la escasez de plazas en los seminarios para formar a los nuevos sacerdotes. En 1999 organizó la distribución de socorros a las personas que habían perdido todos sus bienes como resultado de las graves inundaciones que afectaron ese año a Viet Nam, y, a raíz de las inundaciones, estableció varios proyectos de socorro. Según la fuente, esas actividades, financiadas con cargo a la ayuda proveniente del extranjero, fueron consideradas sospechosas por las autoridades.

8. En diciembre de 2000 el padre Ly tuvo un enfrentamiento con las autoridades respecto del derecho de los aldeanos a cultivar la tierra de la Iglesia que, según se afirmaba, las autoridades querían confiscar; posteriormente hizo varios llamamientos en favor de una mayor libertad religiosa, la devolución de los bienes de la Iglesia, la cesación de la intromisión del Estado en los asuntos religiosos y la puesta en libertad de todas las personas detenidas por sus creencias religiosas.

9. Los medios de información oficiales de Viet Nam han organizado en varias ocasiones campañas públicas de denigración contra el padre Ly. El 26 de marzo de 2001 se publicó un artículo en *Quan Doi Nhan Dan*, el periódico del ejército, en el que se le acusaba de ser "una marioneta de las fuerzas reaccionarias y hostiles de los países extranjeros" y se le preguntaba por las razones de que, pese a la orden de vigilancia dictada contra él, continuara haciendo gala de un comportamiento provocativo y siguiera difundiendo mentiras sobre el partido y el Estado con el propósito de provocar la escisión entre los católicos.

10. El 19 de octubre de 2001 el padre Ly fue condenado a una pena de prisión de 15 años y a 5 años de libertad vigilada por un tribunal popular de Hue en virtud de los artículos 87 y 269 del Código Penal. Fue reconocido culpable de menoscabar la unidad nacional, sabotear a la policía de solidaridad nacional y negarse a obedecer la orden de arresto domiciliario dictada contra él. Posteriormente el padre Ly fue trasladado a la prisión de Thua Phu en Hue. En noviembre de 2001 fue transferido al campamento Ba Sao Nam Ha situado en el distrito de Phu Ly, provincia Ha Nam, en el norte de Viet Nam, un campo de trabajos forzados dependiente del Ministerio del Interior.

11. Se dice que el último juicio del padre Ly sólo duró cuatro horas y se celebró a puerta cerrada. No se le permitió ser asistido por un abogado defensor ni tampoco convocar a testigos de la defensa. Según la fuente, el juicio a que fue sometido no se ajustó a las normas internacionales mínimas de un proceso imparcial.

12. Durante gran parte de los últimos 27 años, el padre Ly ha tratado de ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y la libertad de culto. Nunca recurrió a la violencia ni incitó a ella. Ha sido detenido y condenado únicamente por defender sus opiniones religiosas y políticas no violentas.

13. En su respuesta el Gobierno manifestó que es completamente falso afirmar que la detención y la condena de Nguyen Van Ly sean un castigo por ejercer pacíficamente sus derechos y libertades, que en Viet Nam nadie es detenido o castigado por ejercer sus derechos y libertades legales y que sólo son juzgados, de estricta conformidad con la ley, quienes están acusados de infringir la ley.

14. Según el Gobierno, Nguyen Van Ly es un reincidente. En 1983 fue condenado por el tribunal popular de la provincia de Binh Tri Thien a una pena de prisión de diez años por haber violado la ley al atentar contra la unidad del pueblo y provocar graves perturbaciones públicas. El 17 de mayo de 2001 fue detenido por la comisión reiterada de actos en violación de dicha ley. Tras un exhaustivo proceso de investigación, el 19 de octubre de 2001 el tribunal popular de Thua Thien, de la provincia de Hue, examinó su causa en un juicio público. El juicio se celebró de estricta conformidad con la ley. La defensa de Ly corrió a cargo de dos magistrados, Hoang Minh Duc y Tran Dinh Chau. El tribunal declaró a Ly culpable de menoscabar la política de unidad nacional (artículo 87.1 del Código Penal de Viet Nam) y de negarse a acatar las decisiones administrativas pertinentes de los órganos oficiales competentes (artículo 269 del Código Penal de Viet Nam).

15. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió a la fuente la información facilitada por el Gobierno, a fin de que la fuente pudiera formular observaciones adicionales, cosa que ha hecho. La fuente declaró que la respuesta del Gobierno no facilitaba hechos ni información adicionales en apoyo de las alegaciones acerca del cumplimiento de las leyes y los procedimientos de Viet Nam, ni tampoco facilitaba documentación e información alguna en apoyo de sus afirmaciones. La fuente llegó a la conclusión de que el Gobierno detuvo a Nguyen Van Ly por haber expresado pacíficamente sus creencias y que no le otorgó las garantías procesales previstas en la legislación interna y en los tratados internacionales.

16. El Gobierno ha declarado que Thadeus Nguyen Van Ly ha sido condenado por poner en peligro la unidad nacional y perturbar el orden público y que la legislación nacional se ha aplicado en consecuencia, sin facilitar ninguna aclaración concreta acerca de la naturaleza de los cargos formulados contra él y sin impugnar el argumento aducido por la fuente de que la detención y la condena de Nguyen Van Ly fue el resultado de sus actividades pacíficas religiosas, sindicales y políticas.

17. El Gobierno no ha presentado argumentos convincentes que invaliden las alegaciones hechas por la fuente, la cual afirma que Nguyen Van Ly fue condenado a una pena de prisión

de 13 años por haber publicado artículos en los que se criticaba al Gobierno y al Partido Comunista, y que el juicio a que fue sometido no respetó las normas internacionales.

18. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no puede por menos de concluir que el padre Nguyen Van Ly fue detenido y condenado a una pena de prisión por haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de opinión y de expresión que ampara el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

19. Como el Grupo de Trabajo ha señalado en varias opiniones relativas a Viet Nam, así como en el informe a raíz de la visita que realizó a ese país, los cargos vagos e imprecisos como los mencionados en los artículos 87 y 269 del Código Penal de Viet Nam no permiten establecer una distinción entre actos armados y violentos que ponen en peligro la seguridad nacional y el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Por tales motivos, el Grupo de Trabajo está persuadido de que Thadeus Nguyen Van Ly ha sido detenido y encarcelado únicamente por sus opiniones, en violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Viet Nam es Parte.

20. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Padre Thadeus Nguyen Van Ly es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

21. Habida cuenta de la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 27 de noviembre de 2003

OPINIÓN N° 21/2003 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 18 de junio de 2003

Relativa a Li Ling y Pei Jilin

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información relativa al caso.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, la cual facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, habida cuenta de las acusaciones formuladas y de la respuesta del Gobierno a las mismas, así como de las observaciones formuladas por la fuente.
5. La fuente afirma que Li Ling, antigua directora de la Oficina Laboral del Distrito de Guta, fue detenida el 28 de mayo de 2002 en su domicilio por agentes de la policía y enviada al Centro de Detención N° 1 de la ciudad de Jinzhou. Posteriormente fue condenada a una pena de prisión de cuatro años. El 15 de noviembre de 2002 ingresó en la prisión de Dabei, provincia de Liaoning, donde, pese al estado crítico de salud en que se encontraba, fue obligada a realizar trabajos pesados. Se desconoce su actual paradero.
6. Se informó además que Li Ling ya había sido detenida a finales de 1999 cuando fue a Beijing para interceder en favor de Falun Gong. En aquella ocasión el juzgado de distrito de Dongcheng, de la ciudad de Beijing, la condenó a una pena de prisión de año y medio.
7. Pei Jilin, de 50 años de edad, residente de la ciudad de Jilin, provincia de Jilin, empleado de la Fábrica N° 101 de la Empresa Química de Jilin, fue detenido por agentes de policía la noche del 16 de julio de 2002 en su residencia temporal de la ciudad de Jilin y trasladado a la comisaría de policía de Wenmiao de la ciudad de Jilin. Se dice que, aunque logró escapar de la comisaría, fue detenido nuevamente y enviado a un campo de trabajo.
8. Se dice asimismo que Pei Jilin fue detenido anteriormente en tres ocasiones acusado de ser miembro practicante de Falun Gong. Así, en octubre de 1999 fue detenido cuando se dirigía a Beijing para interceder en favor de Falun Gong, y permaneció detenido durante 15 días. En diciembre de 1999 fue detenido nuevamente. Tras su puesta en libertad el 1° de octubre de 2000, Pei Jilin se dirigió nuevamente a Beijing para interceder en favor de Falun Gong, siendo detenido nuevamente. Fue enviado a la Oficina de Enlace de Beijing con la ciudad de Jilin, donde se declaró en huelga de hambre en protesta por su detención. Tres días después fue enviado bajo guardia al Centro de Detención N° 3 de la ciudad de Jilin. Un mes después, Pei Jilin fue condenado a tres años de trabajos forzados. Posteriormente fue transferido al Campo de Trabajos de la ciudad de Jiutai. En septiembre de 2001, con su salud en estado crítico, fue puesto en libertad.

9. El Gobierno señaló en su respuesta que el 27 de octubre de 1999 Li Ling y otros organizaron una manifestación ilegal en un lugar público sin haber solicitado previamente la autorización requerida por ley. El 17 de enero de 2000 la Fiscalía Popular del Distrito entabló un procedimiento ante el Tribunal Popular del Distrito Oriental, acusando a Li de violar la ley contra las manifestaciones ilegales. El tribunal vio la causa, estimó que el comportamiento de Li equivalía a una manifestación ilegal y la condenó, en virtud del artículo 296 del Código Penal chino, a una pena de prisión de 18 meses. Li apeló contra la sentencia, y el Tribunal Popular Intermedio confirmó la sentencia inicial.

10. Tras su puesta en libertad después de cumplir la condena, Li volvió a perturbar el orden público recurriendo a un grupo herético con el fin de menoscabar el cumplimiento de la ley. La Fiscalía Popular del Distrito de Guta de la ciudad de Jinzhou entabló un procedimiento y acusó a Li de haber utilizado un grupo herético para menoscabar la aplicación de la ley. Li fue condenada a una pena de prisión de cuatro años, y recurrió la sentencia. El 4 de noviembre de 2002 el Juzgado Popular Municipal Intermedio de Jinzhou dictaminó que los hechos establecidos en la sentencia inicial eran evidentes, las pruebas eran exactas y amplias, el delito había sido correctamente definido, la sentencia era proporcionada y el procedimiento judicial había transcurrido de conformidad con la ley, por lo que desestimó la apelación y confirmó la sentencia inicial.

11. Esas causas se examinaron en audiencia pública, habiendo presentado la fiscalía un gran volumen de pruebas y testimonios que los tribunales aceptaron tras haberse confirmado, y consignado en acta, las declaraciones de los testigos y tras ser impugnadas éstas por el demandado y su abogado defensor. En ambos casos, dado que el demandado no recurrió a un abogado, los tribunales le designaron un letrado de oficio y salvaguardaron ampliamente sus derechos e intereses procesales.

12. El 5 de octubre de 2000 el Comité de Reeducción por el Trabajo de la provincia de Jilin impuso a Pei Jilin tres años de reeducación por el trabajo por haber alterado el orden social. Dado que, durante el plazo de reeducación, desarrolló alta presión sanguínea y su salud física empeoró, en octubre de 2001 el Centro de Reeducción le permitió recabar tratamiento médico exterior. Mientras recibía dicho tratamiento, Pei siguió alterando el orden social. El 18 de junio de 2002 el Comité Directivo de Reeducción por el Trabajo del municipio de Jilin le impuso otros dos años de reeducación a causa de sus actividades ilícitas.

13. En su respuesta, la fuente afirma que, con el fin de evitar las críticas internacionales, el Gobierno ha organizado una campaña destinada a desacreditar a Falun Gong. Contrariamente a la afirmación del Gobierno de que se está respetando el derecho de Li Ling a un juicio imparcial, los juicios entablados contra ella no son juicios *strictu sensu* sino juicios ejemplarizantes. El abogado de oficio, obedeciendo órdenes del Gobierno, en lugar de defenderla, ejerció coacción sobre ella. La fuente añade que, tras su primer encarcelamiento, Li Ling escribió una carta en la que afirma sin ambages que la verdadera razón de su detención y encarcelamiento fue su intercesión en favor de Falun Gong. La segunda condena de Li Ling tuvo lugar entre mayo y noviembre de 2002, y su familia no fue informada del juicio.

14. Al igual que en el caso de Pei Jilin, también miembro practicante de Falun Gong, la fuente sostiene que los castigos de reeducación por el trabajo en China se deben a las instrucciones

dadas por el Consejo de Estado de China, por lo que esos castigos son medidas administrativas que no prevén salvaguardias especiales del derecho a un juicio imparcial.

15. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha negado que Li Ling y Pei Jilin fueran detenidos en relación con la práctica de Falun Gong.

16. Dado que no existen pruebas de que Li Ling y Pei Jilin recurrieran a la violencia en su práctica de Falun Gong, el libre ejercicio de dicha práctica está amparado por el artículo 18 sobre la libertad de creencia y por el artículo 19 sobre la libertad de opinión y de expresión de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

17. La restricción del ejercicio pacífico de esas libertades puede entrañar una violación de las normas de derecho internacional. Ni en la acusación de participar en una manifestación ilegal, formulada contra Li Ling, ni en la acusación de causar disturbios sociales, formulada contra Pei Jilin, se dice que se hubieran cometido actos de carácter violento. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo determina que Li Ling y Pei Jilin fueron detenidos por el mero hecho de practicar y defender las enseñanzas de Falun Gong de manera pacífica y en el ejercicio de los derechos a la libertad de creencia, la libertad de opinión y de expresión, y la libertad de reunión y manifestación, que están amparadas por las normas internacionales de derechos humanos.

18. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Li Ling y Pei Jilin es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 10, 11, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

19. En relación con la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de estas dos personas de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 27 de noviembre de 2003

OPINIÓN N° 22/2003 (ARGELIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 12 de junio de 2003

Relativa a Khaled Matari

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información requerida.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Según la información recibida, el Sr. Khaled Matari, nacido el 7 de junio de 1978, de nacionalidad argelina, estudiante de segundo año de la Facultad de Derecho de Argel, que reside habitualmente en Cité Desslier, Bourouba, Argel, fue detenido en su domicilio el 24 de octubre de 1999 a las 22.45 horas por cuatro personas armadas, vestidas de paisano, que dijeron pertenecer a la policía. Preguntaron a Smail Matari, hermano de Khaled, si tenía hermanos. En ese momento Khaled salió de su habitación, y los civiles armados le obligaron a subir a un turismo. Durante la detención no mostraron ningún mandamiento judicial u otra decisión. Varios minutos después, las personas que efectuaron la detención volvieron y exigieron que se les entregara el pasaporte de Khaled. Prometieron a su madre que podría visitar a su hijo en prisión dentro de diez días. Sin embargo, no se facilitó a su familia información alguna sobre la suerte de Khaled. El 10 de noviembre de 1999, a las 14.00 horas, las personas que procedieron a la detención volvieron al domicilio del detenido y exigieron que se les entregara el pasaporte del Sr. Matari, del que ya se habían apoderado durante la detención. En esta ocasión se presentaron como miembros de la seguridad militar.
5. El Sr. Matari permaneció detenido en régimen de incomunicación en el cuartel de Ben Aknoun de Antar (Argel), siendo trasladado después a la prisión militar de Blida, en la que permaneció 13 meses. Durante el año 2000 la familia escribió al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y a la Oficina Nacional de Derechos Humanos solicitando información, sin resultado alguno. Durante este período, nadie conocía el lugar de detención en el que se encontraba ni los cargos formulados contra él. Tampoco pudo el detenido ponerse en contacto con un abogado. Su familia se pasó un año entero tratando de localizarlo y, con tal fin, recorrió todos los lugares de detención posibles. Los responsables a quienes iban dirigidas las cartas jamás respondieron. Sólo en octubre de 2000 la familia dio con su paradero en la prisión militar de Blida. Tuvo que insistir mucho para que se le concediera autorización para visitarlo.
6. Se dice que el 15 de octubre de 2000 el Sr. Matari compareció, junto con muchas otras personas, ante el fiscal militar, quien había requerido, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 *bis* del Código Penal, el inicio de una investigación judicial en relación con las acusaciones de pertenecer a una organización terrorista que opera en el extranjero y de cometer actos terroristas. El juez de instrucción organizó entonces un careo entre el grupo de acusados y un testigo, a quien el Sr. Matari no conocía. Según se afirma, el testigo dijo: "Éstas no son las personas de las que le he hablado".

7. Se dice que el juez de instrucción militar inculpó finalmente al Sr. Matari y dictó contra él prisión preventiva. No obstante, habiendo considerado posteriormente que ese asunto no incumbía a la jurisdicción militar, las autoridades militares de Blida se desentendieron del asunto y enviaron el expediente a las autoridades judiciales del tribunal de Birmandreis. Se afirma que, tras haber recibido la notificación de inculpación, el juez de instrucción dictó orden de prisión preventiva contra el Sr. Matari.
8. El 10 de septiembre de 2001 el Sr. Matari y el grupo de acusados comparecieron ante el juez de instrucción del tribunal civil, pero se negaron a responder a las preguntas en ausencia de sus abogados. El 12 de enero de 2002 comparecieron nuevamente y, en presencia de sus abogados, fueron inculcados y se dictó contra ellos orden de prisión preventiva.
9. Según la fuente, después de cuatro años aproximadamente de detención, el Sr. Matari permanece detenido en la prisión civil de El Harrache sin haber sido juzgado.
10. La fuente añade que, durante su permanencia en régimen de incomunicación durante 13 meses, el Sr. Matari fue golpeado con porras y barras de hierro y sometido a simulacros de ejecución con el fin de obligarle a testimoniar contra una tercera persona. Se afirma que le aplicaron descargas eléctricas en las partes genitales y que le sometieron a la denominada técnica "del trapo" (que consiste en la introducción en la boca de un trapo empapado de agua sucia y de grésil (desinfectante de inodoros) hasta que la persona empieza a ahogarse).
11. Según la respuesta presentada por el Gobierno argelino, Khaled Matari fue detenido por los servicios militares de la policía judicial en relación con el desmantelamiento de una vasta red de terroristas activos en el extranjero. El 15 de octubre de 2000 compareció ante el fiscal militar, quien pidió la apertura de una investigación judicial en relación con la pertenencia a una organización terrorista en el extranjero y la comisión de delitos terroristas, hechos que contemplan y reprimen los artículos 87 *bis* y ss. del Código Penal.
12. El fiscal militar pidió la apertura de una investigación judicial contra el encausado ante el juez de instrucción militar, quien le inculpó y decretó contra él prisión preventiva. Habiendo considerado que la jurisdicción militar carecía de competencia para conocer del caso, el juez de instrucción militar dictó una orden por la que remitió el expediente de la causa al fiscal militar para que la jurisdicción competente examinara el caso, lo que es plenamente compatible con lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Justicia Militar. Fue así como el tribunal militar de Blida se declaró incompetente para examinar la causa y la remitió a las autoridades del tribunal de Bir Mourad Rais, el cual confió el caso al juez de instrucción de la Segunda Sala por demanda introductiva de 19 de agosto de 2001.
13. Tras haber recibido la notificación de su inculpación, el juez de instrucción dictó contra él una orden de prisión preventiva. La información judicial se ha dado por terminada con la transferencia del expediente a la Sala de Acusación del tribunal de Argel, que el 16 de mayo de 2003 dictó una orden de comparecencia ante el Tribunal de lo Penal, ante el cual comparecerá, en su próxima sesión, Khaled Matari y sus coinculcados.
14. En relación con la respuesta del Gobierno argelino, la fuente ha enviado los comentarios siguientes:

- a) En su respuesta las autoridades argelinas se abstienen de mencionar la fecha exacta de la detención de Khaled Matari, que tuvo lugar el 24 de octubre de 1999, es decir, cerca de un año antes de su comparecencia, el 15 de octubre de 2000, ante el fiscal militar (que las autoridades argelinas mencionan).
- b) Fueron civiles armados que decían pertenecer a la policía, y que no presentaron mandamiento judicial alguno, los que procedieron a la detención en plena noche, sin informar a la familia del lugar al que trasladaron al Sr. Matari o los motivos de su detención.
- c) Khaled Matari permaneció desaparecido durante 12 meses pese a los esfuerzos de su familia para dar con su paradero, al tiempo que los responsables de todos los centros de detención y las autoridades negaban sistemáticamente que hubiera sido detenido. La fuente recuerda que el hermano del interesado desapareció en las mismas circunstancias el 22 de marzo de 1995, tras haber sido detenido por policías de la comisaría de la Montagne (Bourouba), y desde entonces no se ha sabido nada de él.
- d) Durante los 12 primeros meses de detención, cuando se le mantuvo en régimen de incomunicación en el cuartel de Ben Aknoun (Antar), no tuvo acceso a un abogado y fue sometido, según se afirma, a intensas torturas para obligarle a prestar testimonio contra una tercera persona.
- e) Fue localizado por casualidad, gracias a una persona que le vio en la prisión militar de Blida e informó a su familia, la cual tuvo muchas dificultades para obtener un permiso de visita.
- f) Así pues, el Sr. Matari permanece detenido desde hace cuatro años sin haber sido juzgado.

15. De lo que antecede se desprende que el Gobierno se limitó a declarar que el Sr. Khaled Matari fue detenido por los servicios militares como integrante de una amplia red terrorista que opera en el extranjero y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 y ss. del Código Penal, compareció ante el fiscal militar. No obstante, al estimar que la jurisdicción militar era incompetente, según el artículo 93 del Código Penal, las autoridades judiciales militares se inhibieron en favor del tribunal de lo penal. En espera de que la sala competente examine el caso, el inculcado permanece en prisión preventiva.

16. El Grupo de Trabajo observa que ha transcurrido casi un año entre la detención del Sr. Khaled Matari, el 24 de octubre de 1999, y su comparecencia ante el fiscal militar el 15 de octubre de 2000. El Gobierno no ha presentado argumentos convincentes para impugnar las alegaciones de la fuente, que sostiene que el Sr. Matari ha permanecido más de cuatro años en prisión preventiva sin que se probara su culpabilidad. Es más, el Sr. Matari no pudo en ningún momento beneficiarse de la asistencia de un abogado, privado o de oficio. Estos hechos, señalados por la fuente, no han sido impugnados por el Gobierno en su respuesta.

17. El Grupo de Trabajo observa asimismo que, en su respuesta, el Gobierno se abstiene de mencionar la fecha exacta de la detención del Sr. Khaled Matari, mientras que la fuente señaló que permaneció durante más de un año en régimen de incomunicación en un cuartel.

18. El Grupo de Trabajo considera, pues, que el Sr. Khaled Matari no pudo beneficiarse de un procedimiento justo y equitativo, con la consiguiente violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que Argelia es Parte.

19. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La detención del Sr. Khaled Matari es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República Argelina Democrática y Popular es Parte, y corresponde a la categoría III de los principios aplicables al examen de los casos presentados al Grupo.

20. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Argelia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 27 de noviembre de 2003

OPINIÓN N° 23/2003 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 11 de julio de 2003

Relativa a Xu Wenli

El Estado ha firmado pero no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido dentro del plazo fijado de 90 días.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya facilitado información sobre los hechos alegados ni haya expresado su posición sobre la cuestión en cuanto al fondo, a pesar de que se le pidió expresamente que lo hiciera. El Grupo de Trabajo considera que, habida cuenta de las denuncias fundamentadas que se han presentado, está en situación de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso.
5. Según la información presentada al Grupo, Xu Wenli tiene 60 años, nació el 1° de enero de 1943, reside en Beijing, actualmente está recluido en la prisión Yanqing de Beijing, está considerado como un activista veterano en favor de la democracia, padece, según se dice, la hepatitis B y revela síntomas de una grave enfermedad. En noviembre de 1998 fue detenido en su domicilio por miembros de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing. Después de su detención se mostró a su esposa una orden de registro, tras lo cual He Xintong y su vivienda fueron registradas. El Sr. Xu fue acusado de tratar de establecer en Beijing y Tianjin secciones de una organización denominada el Partido Democrático de China y de poner en peligro la seguridad del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal enmendado en marzo de 1997.
6. El 21 de diciembre de 1998, a raíz de un juicio a puerta cerrada que duró un día, Xu Wenli fue condenado a una pena de prisión de 13 años. Se le denegó representación legal y se vio obligado a llevar su propia defensa.
7. Según la fuente, desde 1982 Xu Wenli es constantemente recluido en prisiones y centros de detención por las actividades que realiza en pro de la democracia. Ha creado numerosos movimientos y grupos para promover los derechos humanos y la democracia. Xu Wenli ha pasado gran parte de su vida bajo la vigilancia constante de los órganos de seguridad oficiales. El 8 de junio de 1982 fue condenado a una pena de prisión de 15 años por "organizar ilegalmente una camarilla para derrocar al Gobierno". Fue puesto en libertad en 1993, tras lo cual fue interrogado repetidamente y acusado de violar la libertad condicional. Cinco años después, en 1998, Xu Wenli intentó establecer oficialmente un grupo independiente para vigilar el respeto de los derechos humanos. Cuando sus esfuerzos fracasaron, y tras haber publicado dos números de una hoja informativa no autorizada, permaneció detenido durante 24 horas en una comisaría

de policía de Beijing y se le advirtió que no publicara material alguno sin obtener previamente el consentimiento oficial.

8. La fuente informa asimismo que Xu Wenli participó en 1979-1981 en el movimiento "Muralla de la democracia". Ayudó a la sazón a publicar una importante revista disidente titulada *Quinto Foro de Abril*, confeccionó una lista con 20 sugerencias y la envió al Comité Central del Partido Comunista, distribuyó una hoja informativa privada, concedió numerosas entrevistas en las que subrayó la necesidad de que las sociedades marxistas sean más democráticas y publicó varios artículos en Hong Kong.

9. La fuente añade que Xu Wenli precisa atenciones médicas urgentes y que debe someterse a tratamiento fuera de la prisión. Sólo ha recibido medicamentos baratos y básicos de las autoridades penitenciarias, y se le ha denegado un tratamiento médico adecuado para la hepatitis. También ha perdido todos sus dientes, y su cabello se ha vuelto cano.

10. Según la fuente, Xu Wenli fue encarcelado por haber publicado dos números de un periódico no autorizado en marzo de 1998. También ha sido encarcelado, en violación del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por haber intentado fundar un grupo independiente de vigilancia de los derechos humanos, así como las secciones en Beijing y Tianjin del Partido Democrático de China como partido político de oposición, lo que le valió ser acusado de "poner en peligro la seguridad del Estado".

11. La fuente afirma que la detención del Sr. Xu también contraviene los Principios de Johannesburgo de 1995 sobre la seguridad nacional relativos a la libertad de expresión y de acceso a la información, cuyo principio séptimo dice que "el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión no será considerado como una amenaza a la seguridad nacional ni sujeto a ninguna restricción o castigo". Según la fuente, la interpretación por las autoridades de la "seguridad del Estado" viola tanto el espíritu como la letra de estos Principios de Johannesburgo.

12. Por último, la fuente añade que el juicio de un día contra Xu Wenli, celebrado a puerta cerrada y sin defensa legal, constituía una violación del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

13. Según la información recibida por el Grupo de Trabajo, Xu Wenli, que fue anteriormente detenido en 1998 por actos de desobediencia pacífica contra el Gobierno, fue detenido nuevamente el 30 de noviembre de 1998. Su juicio sólo duró un día. No se le permitió la asistencia de un letrado y tuvo que encargarse de su propia defensa. Fue acusado de poner en peligro la seguridad del Estado y condenado a una pena de prisión de 13 años. Los cargos se basaban en el hecho de que Xu Wenli había tratado desde 1998 de organizar un grupo de derechos humanos y una organización política en China. También había escrito artículos para una revista no autorizada, por lo que se le advirtió que no estaba autorizado a publicar ningún artículo sin previa autorización del Gobierno. Actualmente Xu Wenli cumple la condena impuesta y se encuentra muy enfermo.

14. Según parece, las actividades de Xu Wenli no eran sino una expresión del derecho legítimo a la libertad de expresión y de asociación, proclamado en los artículos 10, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

15. El juicio de Xu Wenli no respetó las normas mínimas de un juicio imparcial, ya que no fue un juicio público ni se permitió al acusado recabar la asistencia de un abogado o un defensor de oficio.

16. Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Xu Wenli es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 10, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a las categorías II y III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

17. En consonancia con la opinión emitida, el Grupo del Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Xu Wenli. El Grupo de Trabajo también alienta al Gobierno a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 27 de noviembre de 2003

OPINIÓN N° 24/2003 (ISRAEL)

Comunicación dirigida al Gobierno el 2 de mayo de 2003

Relativa a Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat y Jonathan Ben-Artzi

El Estado ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Habida cuenta de las alegaciones presentadas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones al respecto. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, en el contexto de las denuncias formuladas y las correspondientes respuestas del Gobierno.
5. Según la información presentada al Grupo de Trabajo, cuando Matan Kaminer fue llamado a filas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se presentó en la Base de Clasificación de Bakun en su fecha de incorporación a filas (9 de diciembre de 2002) pero se negó a hacerlo. Fue arrestado, y el tribunal militar de Jaffa confirmó su detención.
6. Adam Maor se presentó el 12 de diciembre de 2002 cuando las FDI le llamaron a filas, pero también se negó a incorporarse y fue inmediatamente arrestado. Estuvo recluido en un campo militar a la espera de su proceso judicial. Le impusieron un régimen de detención abierto, que le permitía salir temporalmente del campo con permiso del tribunal.
7. Noam Bahat fue arrestado por el ejército el 10 de diciembre de 2002 por no haber cumplido la orden de incorporación a las FDI. Se le condenó a reclusión. Estuvo detenido en régimen abierto mientras se le juzgaba. Pidió que le eximieran del servicio militar porque se oponía a la ocupación de los territorios palestinos y a las violaciones de los derechos humanos que se producían allí. Su petición fue rechazada porque sus argumentos eran de carácter político. Se comunica que, con arreglo a la legislación israelí un comité militar puede admitir la objeción de conciencia en casos de "pacifismo total". Se aduce que la petición del Sr. Bahat de comparecer ante dicho comité fue rechazada. El 15 de enero de 2003 inició una huelga de hambre en protesta por su detención y la de todos los objetores de conciencia y contra las violaciones de los derechos del pueblo palestino.
8. Jonathan Ben-Artzi fue arrestado por los militares el 8 de agosto de 2002, al negarse a incorporarse a las FDI. Se le impuso una sanción disciplinaria de 28 días de prisión, al parecer, confirmada por un tribunal militar. Posteriormente se le impusieron otras tres condenas más de 28, 28 y 23 días, porque con arreglo a la legislación israelí cada negativa a cumplir el servicio militar constituye un delito independiente. Ben-Artzi propuso cumplir un servicio alternativo pero no se le permitió. Solicitó comparecer ante el comité militar de objeción de conciencia para exponer sus argumentos pero dicha petición le fue denegada. Un tribunal disciplinario militar

condenó al Sr. Ben-Artzi a una pena de prisión, confirmada por un tribunal militar de apelación. El Sr. Ben-Artzi pidió que el Tribunal Supremo investigara su caso, o que lo hiciera un tribunal civil.

9. La fuente formuló dudas acerca de que un tribunal militar conforme con la legislación israelí cumpliera los criterios de independencia e imparcialidad del tribunal, alegando que sólo el juez presidente era abogado de formación, y que los otros dos jueces eran oficiales del ejército. Para justificar su alegación de que las condenas eran ilegales, la fuente invoca el párrafo 2 del artículo 18 del Pacto que dispone que "nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección".

10. El Gobierno proporcionó al Grupo de Trabajo la siguiente información. Con respecto a las alegaciones específicas formuladas por la fuente, la Ley sobre el servicio general de seguridad y la Ley de justicia militar aplica la jurisdicción militar a las cuatro personas interesadas a partir de la fecha en que tenían obligación de incorporarse al servicio militar. Gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que los soldados. Con arreglo al derecho aplicable, la negativa de dichas personas a cumplir una orden legítima constituye un delito militar perseguible por procedimiento disciplinario o penal. El Gobierno añade además que ningún sistema militar puede conciliarse con el principio de que los soldados puedan dictarle cuándo y bajo qué circunstancias cumplirán el servicio militar.

11. Matan Kaminer, Noam Bahat y Adam Maor en ningún momento se declararon pacifistas; su negativa a incorporarse a filas se basaba únicamente en su oposición a determinadas políticas del Gobierno de Israel. Además, en contradicción con la información facilitada por la fuente, Noam Bahat sí compareció ante el Comité asesor el 7 de octubre de 2002, y éste determinó que no era objetor de conciencia.

12. El Sr. Kaminer, el Sr. Bahat y el Sr. Maor cumplieron sanciones disciplinarias por haberse negado a obedecer órdenes militares y, tras negativas reiteradas (cada una de las cuales constituye un delito en sí), fueron inculcados ante un tribunal militar. Se llegó a un acuerdo con cada uno de los encausados de manera que permanecieron en régimen abierto durante el procedimiento. Las condiciones de su detención en régimen abierto comprendían un permiso para salir de la base un fin de semana de cada tres, que es la práctica común de los soldados que cumplen el servicio militar en Israel.

13. Desde entonces se aplazó el servicio militar de Adam Maor por razones médicas, a partir del 12 de mayo de 2003. En esa fecha fue licenciado y ya no cumple el servicio militar.

14. Antes de su fecha de incorporación, Jonathan Ben-Artzi se declaró objetor de conciencia al servicio militar. Compareció ante el Comité asesor tres veces para justificar su posición, contrariamente a lo expuesto por la fuente. El Comité no le consideró pacifista y Jonathan Ben-Artzi apeló ante el Tribunal Supremo en su calidad de Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Supremo determinó que las conclusiones del Comité eran razonables y desestimó la apelación. El Gobierno señala que, al prestar declaración, el Sr. Ben-Artzi dijo expresamente que no se oponía al concepto de guerra *per se*.

15. Jonathan Ben-Artzi cumplió sanciones disciplinarias por negarse a obedecer órdenes militares y, tras negativas reiteradas (cada una de las cuales constituye un delito en sí), fue

inculpado ante un tribunal militar. Durante el procedimiento en el tribunal militar, el Sr. Ben-Artzi invocó el principio de la cosa juzgada. La reclamación fue rechazada, ya que había cometido numerosos delitos de desobediencia y que la causa expuesta ante el tribunal no guardaba relación con ninguno de los delitos por los que había sido inculpado previamente. Se llegó con él al acuerdo de que permanecería en régimen abierto mientras duraba el proceso.

16. Jonathan Ben-Artzi dijo además que su caso debía juzgarlo un tribunal civil y no uno militar y, con ese motivo, apeló ante el Tribunal Supremo en su calidad de Tribunal Superior de Justicia. La apelación fue desestimada según una motivación detallada, entre otras cosas, porque la jurisdicción militar es profesional, objetiva e imparcial, y aplica procedimientos jurídicos similares a los de la jurisdicción civil, con salvaguardias muy precisas para garantizar los derechos del encausado. Éste está representado por los letrados que elija y puede citar a testigos; ambas jurisdicciones prevén el derecho de apelación ante el Tribunal Supremo.

17. En conclusión, el Gobierno afirma que ninguno de los individuos citados es objetor de conciencia al servicio militar, en el sentido generalmente admitido de este término. Según se ha detallado anteriormente, ninguno de ellos permanece detenido en la actualidad en régimen cerrado.

18. En sus observaciones acerca de la respuesta del Gobierno, la fuente admite que el Sr. Ben-Artzi compareció ante el comité de objeción de conciencia tres veces, pero que en todas ellas se le denegó el derecho a rechazar el servicio militar como pacifista. La fuente admite asimismo que el Sr. Ben-Artzi no pudo afirmar ante el tribunal militar que no se habría alistado con los aliados durante la segunda guerra mundial. Es el motivo por el que el tribunal concluyó que, al igual que el Sr. Maor, el Sr. Bahat y el Sr. Kaminer, no se le podía considerar pacifista, ya que no se oponía a la guerra *per se*. La fuente afirma que la razón fundamental de que los cuatro hombres se nieguen a cumplir el servicio militar es su objeción moral de conciencia a la ocupación militar de los territorios palestinos.

19. La fuente afirma que, aunque Adam Maor fue licenciado en la práctica temporalmente, tras su operación se le ha vuelto a detener.

20. La fuente afirma que el Comité de Derechos Humanos en su Observación general N° 22 acerca del artículo 18 del Pacto entiende que el derecho a la objeción de conciencia puede derivarse de dicho artículo.

21. La fuente se remite al informe anual de 2001 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (E/CN.4/2001/14, párrs. 91 a 94), en el cual el Grupo de Trabajo señala que al encarcelar reiteradamente a los objetores de conciencia se pretende hacerles mudar de parecer y que, por consiguiente, es incompatible con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 18 del Pacto.

22. Por último, la fuente cuestiona la admisibilidad del argumento del Gobierno de que las cuatro personas no se encuentran en un sistema de detención cerrado.

23. Para determinar si la detención de estos cuatro individuos es arbitraria, hay que responder a las siguientes preguntas:

- a) ¿Constituye la detención de los cuatro reclutas en una base militar una privación de libertad en el sentido contemplado en el mandato del Grupo de Trabajo?
- b) ¿Se han respetado las normas internacionales sobre el derecho a un juicio imparcial en sus procesos?
- c) ¿Supone su procesamiento por no haber cumplido una orden militar, una infracción de las obligaciones internacionales de Israel?
- d) ¿Son las reiteradas sanciones que se les imponen por negarse a cumplir el servicio militar acordes con lo dispuesto en materia de derecho a un juicio imparcial?

24. El Gobierno adujo que Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat y Jonathan Ben-Artzi están detenidos en régimen abierto. El Grupo de Trabajo quiere precisar que a tenor de la información presentada por la fuente y el Gobierno, no cabe duda de que están retenidos a la fuerza en condiciones que equivalen a la privación de libertad, independientemente del hecho de que las condiciones de régimen abierto conlleven el permiso de salir de la base militar uno de cada tres fines de semana.

25. La fuente no cuestiona la información detallada facilitada por el Gobierno en el sentido de que los individuos a quienes se deniega la condición de objetores de conciencia y que son juzgados por no cumplir órdenes militares gozan de la misma protección que los civiles con arreglo al derecho procesal penal.

26. La fuente alega que la privación de libertad de Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat y Jonathan Ben-Artzi es arbitraria porque se ha impuesto para castigarles por ejercer su libertad de conciencia, que es un derecho amparado por el derecho internacional, entre otras cosas, en virtud del artículo 18 del Pacto, del que Israel es signatario.

27. Al Grupo de Trabajo le satisface que aumente el número de legislaciones nacionales que abandonan el sistema del servicio militar armado obligatorio y que una serie de Estados se preparen para sustituirlo por alternativas. Tampoco cabe duda de que el derecho internacional tiende a reconocer el derecho de los individuos a negarse a portar y a utilizar armas o a cumplir el servicio militar por razones de creencias religiosas o de conciencia. Pero en la actualidad no se puede afirmar que la tendencia haya llegado al punto en que la denegación por un Estado del derecho a la objeción de conciencia sea incompatible con el derecho internacional. El Grupo de Trabajo también tomó nota de la referencia que hizo la fuente a la Observación general N° 22 del Comité de Derechos Humanos.

28. La fuente también alega que las múltiples sanciones impuestas a Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat y Jonathan Ben-Artzi por el mismo delito son incompatibles con el principio de *non bis in idem* recogido en el párrafo 7 del artículo 14 del Pacto.

29. El Gobierno ha expuesto claramente al Grupo de Trabajo que, con arreglo a la legislación israelí, los cuatro individuos en cuestión han cumplido penas disciplinarias en más de una ocasión por negarse a cumplir órdenes militares. Aunque el Gobierno no especificó el número y la duración de las detenciones declaró de manera inequívoca que se habían impuesto a los cuatro reclutas en cuestión varias (es decir, más de una) sanciones disciplinarias que conllevaban

privación de libertad "a raíz de reiteradas negativas (cada una de las cuales constituye un delito independiente) fueron inculcados ante un tribunal militar". Además, el Gobierno explicó al Grupo de Trabajo que una de las cuatro personas, el Sr. Ben-Artzi, había invocado ante el Tribunal el principio de la cosa juzgada, pero que se había desestimado su alegación "... ya que había cometido numerosas faltas de desobediencia y que el caso expuesto ante el tribunal no guardaba relación con ninguno de los delitos por los que había sido inculcado anteriormente".

30. El Grupo de Trabajo no está convencido de las explicaciones del Gobierno de que después de una condena por no haber obedecido la orden de cumplir el servicio militar los actos reiterados de desobediencia se consideran nuevos delitos. Ateniéndose en gran medida a las líneas de razonamiento que siguió en su opinión N° 36/1999 y teniendo presente su recomendación N° 2 sobre la detención de objetores de conciencia (E/CN.4/2001/14, párrs. 91 a 94), el Grupo de Trabajo cree que si, después de una condena inicial, los condenados se muestran, por razones de conciencia, igual de determinados a desobedecer las órdenes de incorporación subsiguientes, las sanciones adicionales que se impongan por motivo de desobediencia tienen el mismo sentido y finalidad: obligar al individuo a cumplir el servicio militar. Por consiguiente, la sanción segunda y siguientes no son compatibles con el principio de *non bis in idem*, contemplado en el párrafo 7 del artículo 14 del Pacto, que establece que "nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme...". Además, reiterar las sanciones por negarse a cumplir el servicio militar supondría obligar a alguien a cambiar de opinión por miedo a verse privado de libertad si no de por vida, al menos hasta la edad en que los ciudadanos dejan de estar obligados a cumplir el servicio militar.

31. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo expresa la opinión siguiente:

La segunda y las subsiguientes penas de privación de libertad de Matan Kaminer, Adam Maor, Noam Bahat y Jonathan Ben-Artzi contravienen lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El incumplimiento de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial es de gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario, que corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

32. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 28 de noviembre de 2003

OPINIÓN N° 25/2003 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 17 de julio de 2003

Relativa a Di Liu

El Estado ha firmado pero no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya dado respuesta en el plazo de 90 días.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. El Grupo de Trabajo deplora que el Gobierno no le haya presentado información sobre los hechos denunciados y sobre su posición con respecto al fundamento del caso, a pesar de las reiteradas invitaciones a que lo hiciera. No obstante, el Grupo de Trabajo cree que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso en el contexto de las alegaciones sustanciadas que se han formulado.
5. Según la información presentada al Grupo, Di Liu fue detenida el 7 de noviembre de 2002 por haber publicado en el sitio web Xizi Tribune varios artículos en los que criticaba las restricciones impuestas por el Gobierno al uso de Internet y el cierre de cibercafés, y por haber expresado su solidaridad con Huang Qi, defensor en Internet de los derechos humanos, detenido en junio de 2000.
6. El Grupo de Trabajo estima que todas estas actividades constituyen usos legítimos del derecho a la libertad de expresión reconocido en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que la detención de la Sra. Di es contraria a los derechos humanos.
7. El Grupo de Trabajo también tiene en cuenta el hecho de que Di Liu ya había sido detenida el 7 de noviembre de 2002 en virtud del artículo 105 del Código Penal enmendado en marzo de 1997. Di Liu fue acusada oficialmente de poner en peligro la seguridad del Estado pero no se le comunicó la fecha del juicio ni se le proporcionó asistencia letrada. Di Liu permaneció detenida más de un año sin que se respetaran las normas relativas a un juicio imparcial.
8. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Di Liu es arbitraria, ya que contraviene los artículos 10, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a las categorías II y III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.
9. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Di Liu. El Grupo de Trabajo también alienta al Gobierno a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 28 de noviembre de 2003

OPINIÓN N° 26/2003 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 12 de junio de 2003

Relativa a Ouyang Yi y Zhao Changqing

El Estado ha firmado pero ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya proporcionado información en relación con las alegaciones de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. A la luz de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo habría acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno. No obstante, a pesar de no haber recibido información alguna de éste, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso considerado, teniendo presente en particular que el Gobierno no ha impugnado los hechos y alegaciones contenidos en la comunicación.
5. De acuerdo con la fuente, Ouyang Yi, nacido el 18 de junio de 1968 es profesor de enseñanza secundaria, miembro de la organización denominada Partido Democrático Chino y es uno de los administradores de un sitio web comercial (www.5633.com). Cuando se envió la comunicación al Grupo de Trabajo, estaba preso en el centro de detención de Chengdu, en la provincia de Sichuan.
6. A falta de cualquier información procedente del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha de dar por supuesto que aún sigue detenido. Se denuncia que hasta el momento no se ha fijado la fecha de juicio. Ouyang Yi, al parecer, fue detenido el 4 de diciembre de 2002 por miembros de la policía de seguridad, que registraron su casa y confiscaron una serie de documentos, entre ellos muchos artículos que Ouyang Yi había colocado en Internet. El 7 de enero de 2003, la Oficina de Seguridad Pública acusó oficialmente al Sr. Ouyang de "incitación al derrocamiento del poder del Estado" con arreglo al artículo 105 del Código Penal enmendado en marzo de 1997. El texto correspondiente del artículo 105, transmitido por la fuente, dice lo siguiente:

"Quien organice, planifique y actúe como cabecilla para subvertir el poder político del Estado y derrocar el sistema socialista, será castigado con pena de cadena perpetua u otra no inferior a diez años de reclusión; los participantes activos serán condenados a un mínimo de tres años y un máximo de diez años de reclusión; los demás participantes serán castigados con un máximo de tres años de reclusión y privación de sus derechos políticos.

Quien incite a subvertir el poder político del Estado y derrocar el sistema socialista mediante la difusión de rumores, calumnias u otros medios será castigado con un máximo de cinco años de reclusión y la privación de sus derechos políticos; los cabecillas y los culpables de delitos graves serán condenados a un mínimo de cinco años de reclusión."

7. Ouyang Yi ya había firmado cartas abiertas y peticiones en las que se pedía la liberación de presos políticos, que le valieron detenciones e interrogatorios en varias ocasiones, incluidos tres meses de prisión. En 1999 fue expulsado con su familia de su vivienda y perdió su puesto de profesor. La fuente cree que la detención del Sr. Ouyang está relacionada con la de otros militantes que se expresan a través de Internet y con su carta abierta al 16º Congreso Nacional del Partido Comunista de China.

8. Las actividades de que se le acusa son criticar al Gobierno por seguir una política económica adecuada y haber firmado, junto con otras 192 personas, una carta abierta al Congreso Nacional Popular en la que pedían reformas políticas y en la que figuraban seis iniciativas: reevaluar el movimiento democrático de 1989; autorizar a los exilados políticos a volver a China; suspender el arresto domiciliario de Zhao Ziyang y devolverle sus derechos políticos; liberar a todos los presos políticos; ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y extender al nivel nacional el sistema de las elecciones democráticas locales y municipales. Al menos otros siete firmantes de la petición fueron también detenidos.

9. Según la fuente, Zhao Changqing fue detenido el 7 de noviembre de 2002 por funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública de Xi'an (*Xi'an shi gong an ju*), que no presentaron la debida orden de detención. Unos días antes de detenerle habían registrado su piso. El Sr. Zhao estuvo detenido en un lugar secreto hasta el 27 de noviembre de 2002. Ese día, funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública de Xi'an entregaron a su hermana una notificación oficial de detención (*xing shi zhu liu de tong zhi*). El 27 de diciembre de 2002, entregaron una notificación oficial de reclusión a su hermano mayor (*zheng shi bei bu*), con lo que dio comienzo la reclusión propiamente dicha (*dai bu*). El Sr. Zhao fue acusado de "incitación a subvertir el poder del Estado" (*shan dong dian fu guo jia zheng quan*), prevista en el artículo 105 del Código Penal (cuyo texto se reproduce *supra*), cargo por el que se le puede condenar a 15 años de reclusión.

10. Los cargos contra Zhao Changqing se refieren a su actividad de redacción y distribución de una carta abierta al 16º Congreso Nacional del Partido Comunista de China en noviembre de 2002 (véase el párrafo 8).

11. El Sr. Zhao en la actualidad está detenido en el hospital Kangfu de Xi'an bajo la supervisión de la Oficina de Seguridad Pública de Xi'an. Su salud se ha deteriorado profundamente desde el inicio de su detención en noviembre de 2002. Su tuberculosis empeoró mientras estaba preso. Su ingreso en el hospital indica que su enfermedad es grave. Todavía no se ha fijado la fecha del juicio. Al Sr. Zhao le han denegado la libertad bajo fianza. Su familia ha contratado a un abogado para su defensa.

12. Zhao Changqing ya había sido detenido en junio de 1989 por participar en las manifestaciones democráticas de ese año en Beijing. Estuvo preso en la cárcel de Xincheng, en Beijing, más de medio año. En 1997, reunió firmas suficientes para presentarse a las elecciones de representantes locales del Congreso Nacional Popular, pero poco después fue detenido y condenado a tres años de reclusión por poner en peligro la seguridad del Estado. Fue liberado en marzo de 2001 y desde entonces ha proseguido su militancia política.

13. Según la fuente, el Sr. Zhao fue detenido y permanece preso por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de opinión y de expresión. La fuente aduce además que la detención de esta persona constituye una violación de los artículos 64 y 65 de la Ley de procedimiento penal de

China, porque cuando se le detuvo no se presentó la debida orden de detención y los procedimientos de detención y prisión no se desarrollaron correctamente.

14. El Grupo de Trabajo considera que las actividades que anteceden, aunque críticas con el Gobierno, se atienen a los límites de la libertad de expresión de Ouyang Yi Zhao Changqing, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o por cualquier otro medio, incluido Internet, sin consideración de fronteras. En ese caso concreto, el Grupo de Trabajo no dispone de información en el sentido de que medidas tan graves (la detención y procesamiento penal) fueran necesarias o inevitables para proteger el orden público. La formulación del artículo 105 del Código Penal de China más bien hace pensar al Grupo de Trabajo de que el objetivo de su detención es reprimir a los oponentes políticos del Gobierno. Sus actividades fueron un intento de participar en el Gobierno del país presentando una petición a sus representantes.

15. A tenor de las denuncias formuladas, que el Gobierno no ha negado, aunque tuvo oportunidad de hacerlo, el Grupo de Trabajo concluye que la detención de Ouyang Yi y de Zhao Changqing se debe exclusivamente a sus actividades políticas y de defensa de los derechos humanos, que constituyen un ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

16. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Ouyang Yi y Zhao Changqing es arbitraria, ya que contraviene al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

17. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Ouyang Yi y Zhao Changqing. El Grupo de Trabajo alienta asimismo al Gobierno a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 28 de noviembre de 2003

OPINIÓN N° 1/2004 (MARRUECOS)

Comunicación dirigida al Gobierno el 18 de septiembre de 2003

Relativa a Ali Lmrabet

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con aprecio de la información proporcionada por el Gobierno de Marruecos con respecto al caso en cuestión, recibida dentro del plazo de 90 días a partir de la fecha de la transmisión de la carta del Grupo de Trabajo.
3. El Grupo de Trabajo toma nota asimismo de que el Gobierno le ha comunicado que la persona citada ya no está detenida, hecho confirmado también por la fuente que ha presentado la comunicación.
4. Después de haber examinado toda la información disponible y sin pronunciarse sobre el hecho de que la detención sea arbitraria o no, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso del Sr. Ali Lmrabet a tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 24 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 2/2004 (GEORGIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 20 de enero de 2004

Relativa a Giorgi Mshvenieradze

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya facilitado información acerca de las denuncias de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya presentado la información solicitada a pesar de las reiteradas peticiones. El Grupo de Trabajo considera que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias del caso considerado.
5. La fuente sostiene que el Sr. Mshvenieradze fue detenido porque trató de demostrar el fraude electoral en la mesa N° 23 del distrito de Kobuleti, donde supervisaba el desarrollo de las votaciones en representación de la Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia, en el marco de la labor general de supervisión iniciada por Fair Elections.
6. Trató de advertir del fraude a los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Asimismo trató de impedir que un individuo (que resultó ser un policía de civil) introdujera en el local papeletas en blanco destinadas al parecer a rellenar las urnas. El incidente dio lugar a una discusión que terminó con una paliza propinada por varias personas del local al Sr. Mshvenieradze. Fue el único herido.
7. Después el Sr. Mshvenieradze fue condenado a tres meses de cárcel bajo cargos de gamberrismo (artículo 239.3 del Código Penal de Georgia), por impedir la expresión de la voluntad de los electores (art. 162) y por atentar contra un funcionario estatal (art. 353). Cuando se presentó la comunicación estaba detenido en la cárcel N° 3 de Batumi.
8. Según la fuente, los cargos carecen de fundamento y tienen por objeto castigar al Sr. Mshvenieradze por haber contribuido a mostrar el fraude electoral. Resulta particularmente escandaloso que las autoridades hayan querido interpretar el intento del Sr. Mshvenieradze de impedir que se rellenaran las urnas como un obstáculo a la expresión de la voluntad de los electores.
9. Los hechos denunciados, que el Gobierno no ha negado, muestran que los métodos delictivos empleados contra el Sr. Mshvenieradze estaban motivados por la voluntad de las autoridades de intimidarle y castigarle por participar en actividades de vigilancia tendentes a garantizar la libre expresión de la voluntad de los electores.

10. En vista de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Mshvenieradze es arbitraria, ya que contraviene a los artículos 9 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

11. Habiendo emitido esta opinión el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Giorgi Mshvenieradze, conforme a las normas y principios enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y para impedir que vuelvan a producirse limitaciones similares de los derechos cívicos de los ciudadanos.

Aprobada el 25 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 3/2004 (ISRAEL)

Comunicación dirigida al Gobierno el 26 de mayo de 2003

Relativa a 'Abla Sa'adat, Iman Abu Farah, Fatma Zayed y Asma Muhammad Suleiman Saba'neh

El Estado Parte ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, que facilitó al Grupo de Trabajo sus observaciones al respecto. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de expresar una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a esas denuncias.
5. De acuerdo con la información presentada al Grupo por la fuente, la Sra. 'Abla Sa'adat, militante pro derechos humanos, fue detenida el 21 de enero de 2003 cuando cruzaba la frontera entre Israel y Jordania, en camino hacia Brasil, para participar en el Foro Social Mundial como delegada de la organización palestina de derechos humanos Addameer. Fue conducida al centro militar de detención de Beit El y encerrada en un calabozo sin ser interrogada. No se le permitió salir de la celda hasta que su abogada vino a verla dos días después de su detención.
6. Las Sras. Iman Abu Farah y Fatma Zayed, estudiantes universitarias de Jerusalén, fueron detenidas el 20 de enero de 2003 por el ejército israelí en su apartamento cerca de Ramallah y también fueron conducidas al centro militar de detención de Beit El, que no cuenta con pabellón de mujeres, y sufrieron grave maltrato, equivalente a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
7. El 22 de enero de 2003 se notificaron las órdenes de detención administrativa por un período de cuatro meses a las tres mujeres. El 30 de enero de 2003, 'Abla Sa'adat e Iman Abu Farah, tras la revisión judicial de las órdenes de detención, fueron trasladadas a Neve Tirzah, el pabellón de mujeres de la cárcel de Ramleh. El 26 de enero de 2003, la detención administrativa de Fatma Zayed fue confirmada por la revisión judicial del tribunal militar de 'Ofer y trasladadas al Centro de Interrogatorios de Moskobiyye, en Jerusalén.
8. La Sra. Asma Muhammad Suleiman Saba'neh, de 40 años de edad y madre de seis hijos, residente en el campamento de refugiados de Yenín, fue detenida el 11 de febrero de 2003 en su hogar por unos 50 integrantes del ejército israelí y se le notificó una orden, en fecha no especificada, de detención administrativa por seis meses.
9. Según la fuente, estas cuatro mujeres permanecieron en detención administrativa sin cargos y sin juicio. No se presentaron cargos penales y no hubo intención de procesarlas. Ni las

detenidas ni sus abogados pudieron impugnar los motivos de detención, ya que no se les comunicaron. Pueden permanecer recluidas sobre la base de información secreta que las autoridades militares declaran no poder revelar para no poner en peligro a la fuente.

10. Se señaló además que el procedimiento conocido como revisión judicial es, en realidad, una confirmación de rutina de la orden de detención administrativa. En la mayoría de los casos las órdenes de detención administrativa también son confirmadas por el tribunal militar de apelación. La audiencia de apelación, que los detenidos tienen que iniciar, es la primera y única oportunidad que tienen de averiguar por qué están detenidos.

11. La fuente considera además que la detención administrativa se utiliza como forma de eludir el sistema de justicia penal y evitar las garantías procesales pertinentes. La fuente también formuló denuncias sobre las condiciones de detención.

12. Según el Gobierno, 'Abla Sa'adat fue detenida el 21 de enero de 2003 por actividades que ponen en peligro la seguridad de la zona y fue encarcelada en el centro militar de detención Beit El. El 23 de enero de 2003, el comandante militar dictó una orden de detención administrativa contra ella. La Sra. Sa'adat fue trasladada al establecimiento de detención de mujeres de Neve Tirzah el 29 de enero de 2003. El 6 de marzo de 2003 fue puesta en libertad conforme a una orden que reducía el período de su detención administrativa.

13. Iman Abu Farah fue detenida el 20 de enero de 2003 por estar comprometida con el movimiento Hamas, organización responsable de numerosos ataques criminales contra ciudadanos israelíes. El 23 de enero de 2003, se dictó una orden de detención administrativa de cinco meses y el 28 de enero de 2003 un tribunal militar aprobó la orden. El tribunal sostuvo que, en vista de las pruebas contra la Sra. Abu Farah, tenía el convencimiento de que ponerla en libertad antes de tiempo supondría un peligro real para la protección de la zona y la seguridad de los civiles. El 29 de enero de 2003, se trasladó a la Sra. Abu Farah al establecimiento de detención de mujeres de Neve Tirzah. La Sra. Abu Farah fue procesada el 13 de abril de 2003 acusada de prestar servicios a una organización ilegal (tres cargos), de esconder fugitivos (en este caso a miembros importantes del Hamas) (siete cargos), y de posesión ilegal de armas.

14. Fatma Zayed fue detenida el 20 de enero de 2003 bajo sospecha de estar comprometida con Hamas. El 23 de enero de 2003 se dictó una orden de detención administrativa contra ella por un período de cuatro meses y se la trasladó al Recinto Ruso para ser interrogada. Se postergó durante varios días el encuentro de la Sra. Zayed con su asesor letrado por motivos imperiosos de seguridad, tras lo cual pudo acceder al abogado de su elección.

15. El Gobierno informó además de que, el 2 de febrero de 2003, se anuló la orden de detención administrativa contra la Sra. Zayed y se trasladó el caso a los organismos de seguridad para examinar la posibilidad de presentar cargos contra ella por cometer delitos contra la seguridad. La Sra. Zayed fue acusada el 6 de marzo de 2003 de prestar servicios a una organización ilegal (17 cargos), de esconder fugitivos (10 cargos) y de posesión ilegal de armas. La Sra. Zayed permanece detenida en el pabellón de mujeres de Neve Tirzah con arreglo a la orden de un tribunal militar de mantenerla en prisión provisional durante el desarrollo del procedimiento judicial incoado contra ella.

16. Asma Muhammad Suleiman Saba'neh fue detenida el 11 de febrero de 2003 por su actividad en Hamas. El 12 de febrero de 2003 se le aplicó una orden de detención administrativa por un período de seis meses. El tribunal militar confirmó esa orden con arreglo al procedimiento de revisión judicial.

17. El Gobierno afirma que sólo se recurre a la detención administrativa en casos en que las pruebas confirman que una persona participa en actos ilegales que ponen en peligro la seguridad del Estado y la vida de civiles. Se aplica únicamente en circunstancias en que los procedimientos judiciales habituales son inadecuados por el peligro que puede suponer para las fuentes de información o cuando sea necesario proteger información reservada que no se puede revelar en una sesión pública de un tribunal.

18. En lo que respecta a la suspensión por Israel de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno afirma que, pese a la suspensión, Israel se ha adherido a todas las disposiciones del Pacto, y vela por que nadie sea objeto de detención arbitraria.

19. El Gobierno añade que antes de dictar una orden de detención, el abogado militar debe confirmar que la información en la que se basa ha sido corroborada por fuentes fidedignas. Un comandante militar puede dictar una orden de detención por un período no superior a seis meses. Esta orden puede renovarse, pero puede recurrirse.

20. Todos los que reciben órdenes de detención tienen derecho a elegir un letrado para representarlos, así como la oportunidad de recurrir la orden de detención en dos instancias judiciales. Como parte del proceso de apelación, el tribunal podrá practicar las pruebas presentadas por el personal de seguridad, sin que el detenido ni su abogado estén presentes. No obstante, siempre se informa al detenido de los motivos generales de la orden dictada contra él. Durante la vista de apelación, el detenido y su abogado podrán responder a las denuncias, pedir la comparecencia de testigos y formular preguntas sobre la información de seguridad.

21. El 7 de marzo de 2003 la fuente confirmó que 'Abla Sa'adat había sido puesta en libertad en virtud de una orden que abreviaba el período de su detención administrativa. La fuente informó al Grupo de Trabajo de que no podía confirmar ni refutar la información del Gobierno según la cual Iman Abu Farah y Fatma Zayed fueron acusadas de cometer infracciones penales.

22. La fuente informó de que la orden de detención administrativa de Asma Muhammad Suleiman Saba'neh fue renovada el 11 de agosto de 2003 por cuatro meses. La fuente indica que, pese a la afirmación del Gobierno de que Asma Muhammad Suleiman Saba'neh fue detenida por colaborar con el grupo palestino Hamas, no se facilitó información concreta sobre actividades específicas. La fuente confirmó luego que fue puesta en libertad en noviembre de 2003.

23. La fuente objeta el hecho de que el Gobierno se refiera a Hamas como una mera organización terrorista. Afirma que el movimiento Hamas es un partido político con decenas de miles de seguidores en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza y una red de asociaciones benéficas que presta asistencia médica y en materia de educación, alimentación y subsistencia, y que también cuenta con una rama armada.

24. La fuente comenta además que en los últimos años el Gobierno de Israel ha mantenido a miles de palestinos de los territorios ocupados en detención administrativa durante períodos que van desde unos meses a varios años. A la mayoría de ellos no se les ha interrogado nunca ni se les ha preguntado sobre su posible participación en actividades ilegales concretas en todo el período de su detención administrativa. En otros casos, han sido interrogados durante largos períodos, maltratados y amenazados, antes de ser objeto de detención administrativa.
25. Según la fuente, el Gobierno ha utilizado la detención administrativa para detener a personas sin presentar pruebas de que hubieran cometido delito alguno. Se ha utilizado como medida de castigo e intimidación colectivos y para ejercer presión sobre los familiares.
26. De acuerdo con la información presentada al Grupo de Trabajo, 'Abla Sa'adat fue puesta en libertad el 7 de marzo de 2003; esta información fue proporcionada por el Gobierno y confirmada por la fuente. El Grupo de Trabajo también tomó nota de la puesta en libertad de Asma Muhammad Suleiman Saba'neh en noviembre de 2003.
27. Un tribunal militar acusó a Iman Abu Farah y Fatma Zayed de cometer infracciones penales. Se dice que tuvieron derecho a interponer un recurso ante un tribunal militar y ante el Tribunal Superior.
28. A este respecto, cabe señalar que el Grupo de Trabajo tiene grandes reservas respecto de la jurisdicción militar. Había afirmado que "de subsistir alguna forma de justicia militar, debería en todo caso respetar cuatro límites: a) debería declararse incompetente para juzgar a civiles; b) debería declararse incompetente para juzgar a militares, si entre las víctimas hay civiles; c) debería declararse incompetente para juzgar a civiles y a militares en los casos de rebelión, sedición o cualquier delito que ponga o pueda poner en peligro un régimen democrático; d) no estaría en ningún caso autorizado a imponer la pena de muerte" (véase documento E/CN.4/1999/63, párr. 80).
29. La Sra. Farah y la Sra. Fayed son civiles. Estuvieron en detención administrativa, primero sin poder comunicarse con sus abogados y con dificultades para ejercer la defensa. Luego fueron acusadas por un tribunal militar y sólo pudieron defenderse en la jurisdicción militar. El Gobierno, que ha explicado el sistema de detención administrativa, no niega este procedimiento. Aun cuando los detenidos pudieran acceder al Tribunal Superior de Justicia, si todos los casos obedecen al mismo criterio, el procedimiento podría debilitar fuertemente la capacidad de impugnar su privación de libertad.
30. Cabe recordar que el mandato del Grupo de Trabajo no le faculta para expresar una opinión sobre la legitimidad de las acusaciones que pesan sobre las detenidas.
31. En lo que respecta a la situación que el Gobierno ha descrito sobre el estado de excepción en el país y la reserva formulada al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Grupo de Trabajo (sin tomar posición en cuanto a la validez o el alcance de la reserva, ni de qué otro órgano de las Naciones Unidas¹ pueda ser competencia), considera que

¹"... el Comité sigue preocupado por el carácter drástico de las medidas durante el estado de emergencia, que parecen ir en contra de las disposiciones del Pacto además del artículo 9, suspensión que el Estado Parte notificó en el momento de la ratificación. A juicio del Comité,

incluso en el caso de que el Gobierno no fuera parte en el Pacto, las normas internacionales de derechos humanos sobre la protección del derecho a la libertad se siguen aplicando en su territorio.

32. A este respecto, el derecho a la libertad y seguridad personales plantea condiciones variables sobre el momento en que se puede detener a una persona, durante cuánto tiempo y con sujeción a qué mecanismos de supervisión. Sean cuales sean las circunstancias, sin embargo, estas condiciones deben ajustarse a los principios fundamentales de necesidad, proporcionalidad, humanidad y no discriminación y evaluarse continuamente en relación con éstos.

33. Si la situación de terrorismo en la jurisdicción del Estado fuera de tal naturaleza o grado que la situación de emergencia resultante amenazase la independencia o la seguridad del Estado, éste, sin embargo, no podría suspender determinados aspectos fundamentales del derecho a la libertad que se consideran imprescindibles para la protección de los derechos que no se pueden derogar o que no se pueden derogar en virtud de otras obligaciones internacionales del Estado. Estas obligaciones comprenden la exigencia de que la ley prescriba los motivos y procedimientos de detención, el derecho a ser informado de las razones de la detención, el acceso rápido a un asesor letrado y la familia, un juicio imparcial por un tribunal independiente y los límites prescritos para la duración de la detención prolongada. También se considera que estas protecciones comprenden mecanismos adecuados y efectivos de revisión judicial para supervisar rápidamente las detenciones tras el arresto y detención, y a intervalos razonables cuando se prolonga la detención.

34. En los casos de Iman Abu Farah y Fatma Zayed no se cumplió con la mayoría de estas condiciones. La revisión judicial, de haberla, no fue realizada por un tribunal independiente. No pudieron ejercer su derecho a la defensa. Un tribunal militar de por sí no es independiente del poder ejecutivo. Tuvieron dificultades para procurarse asistencia jurídica y una total falta de información sobre la naturaleza de los cargos que pesaban sobre ellas.

35. En vista de lo que precede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

En lo que respecta a 'Abla Sa'adat y Asma Muhammad Suleiman Saba'neh, teniendo en cuenta que fueron liberadas de la detención administrativa, el Grupo de Trabajo, basándose en el apartado a) del artículo 17 de sus métodos de trabajo, decide archivar los casos.

estas suspensiones van más allá de lo que sería permisible en virtud de las disposiciones del Pacto que permiten la limitación de derechos (por ejemplo, párrafo 3 del artículo 12, párrafo 3 del artículo 19 y párrafo 3 del artículo 21). En cuanto a las medidas que se apartan del propio artículo 9, preocupa al Comité el uso frecuente de las diversas formas de detención administrativa, en particular para los palestinos de los Territorios Ocupados, acompañada por restricciones de acceso a un abogado y la falta de información completa sobre los motivos de la detención. Estas características limitan la efectividad de la revisión judicial, poniendo en peligro la protección contra la tortura y otros tratos inhumanos prohibidos en virtud del artículo 7 y apartándose del artículo 9 de una forma más amplia..." (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Segundo informe periódico de Israel, CCPR/CO/78/ISR, párr. 12).

En lo que respecta a Iman Abu Farah y Fatma Zayed, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad es arbitraria porque es contraria a lo que dispone el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

36. Por consiguiente, y después de emitir esa opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aprobada el 25 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 4/2004 (ETIOPÍA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 17 de octubre de 2003

Relativa a Tadesse Taye

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya facilitado la información relativa a las denuncias de la fuente.
3. (Copiar el texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no le haya facilitado la información que le solicitó repetidamente. El Grupo de Trabajo estima que está en situación de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso.
5. Según la información recibida, Tadesse Taye, empresario de 73 años de edad, residente en Addis Abeba, fue detenido el 27 de mayo de 1993 en el domicilio de su empresa por agentes de seguridad vestidos de civil que no presentaron orden de detención alguna. El motivo de su detención era, al parecer, su pretendida participación en la organización denominada Oromo Liberation Front (OLF) (Frente de Liberación Oromo).
6. Según la fuente, el Sr. Taye está detenido sin cargos ni juicio desde mayo de 1993. Se le ha denegado el acceso a un abogado. El llamamiento de la familia a la autoridad administrativa competente no ha recibido respuesta. Todos los intentos de la familia por obtener su puesta en libertad han sido rechazados.
7. La fuente añade que el Sr. Taye sigue en la cárcel de Dessie, que dista unos 400 km de Addis Abeba. Lo distante del establecimiento hace difícil que la familia lo visite y le lleve comida y otras provisiones. Se informa de que las condiciones de la cárcel constituyen una amenaza para la vida, a causa de las condiciones de higiene que impone el brutal hacinamiento, y a la falta de comida y agua y de atención médica y medicamentos. Las malas condiciones de reclusión han agravado la hipertensión, el reumatismo y la gastritis que padece el Sr. Taye. Además, la fuente denuncia que en la prisión ha tenido que soportar palizas, amenazas de muerte y otras formas de tratos degradantes.
8. Los hechos denunciados, que el Gobierno no refuta, muestran que Tadesse Taye fue detenido por agentes de seguridad vestidos de civil que no presentaron orden de detención alguna. Está detenido sin cargos ni proceso y se le ha denegado el acceso a un asesor letrado.

9. En vista de lo que precede, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad de Tadesse Taye es arbitraria porque es contraria a lo que dispone el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

10. Por consiguiente, y después de emitir esa opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Tadesse Taye, de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aprobada el 26 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 5/2004 (VIET NAM)

Comunicación dirigida al Gobierno el 4 de noviembre de 2003

Relativa a Thich Tri Luc

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo toma nota con agradecimiento de la información recibida del Gobierno en el plazo de 90 días contados desde la carta de envío del Grupo de Trabajo.
3. El Grupo de Trabajo toma nota además de que el Gobierno ha informado al Grupo de que la persona mencionada ya no está detenida.
4. Después de examinar toda la información de que dispone, y sin prejuzgar del carácter de la detención, el Grupo de Trabajo, de conformidad con el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, decide archivar el caso de Thich Tri Luc.

Aprobada el 25 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 6/2004 (REPÚBLICA ÁRABE SIRIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 13 de febrero de 2004

Relativa a Mohammad Shahadeh, Hassan Qi Kurdi, Bashshar Madamani, Haytham Al Hamoui, Yahia Shurbaji, Tarek Shurbaji, Mou' taz Mourad, Abdel Akram Al-Sakka, Ahmad Kuretem, Mohammed Hafez y Moustafa Abou Zeid

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya contestado en el plazo de 90 días.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo hubiera acogido con satisfacción la cooperación del Gobierno. A falta de toda información del Gobierno, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso, especialmente teniendo en cuenta que los hechos y denuncias que figuran en la comunicación no han sido refutados por el Gobierno.
5. Los casos que se resumen a continuación han sido presentados al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del siguiente modo:
 - a) Mohammad Shahadeh, nacido en 1978 en Darayya, en donde reside, ciudadano sirio, profesor ayudante de la Facultad de Literatura Inglesa de la Universidad de Damasco, fue detenido el 14 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército;
 - b) Hassan Qi Kurdi, nacido en 1976 en Darayya, ciudadano sirio, domiciliado en Al Tal, fue detenido el 8 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército;
 - c) Bashshar Madamani, nacido en 1979 en Darayya, ciudadano sirio, domiciliado en Darayya- Kornishe Raissi, fue detenido el 3 de mayo de 2003 en Darayya por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército;
 - d) Haytham Al Hamoui, nacido en 1976 en Damasco, ciudadano sirio, domiciliado en Darayya, investigador y ayudante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Damasco, fue detenido el 3 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército;
 - e) Yahia Shurbaji, nacido en 1979 en Darayya, en donde reside, nacional sirio, estudiante de la Facultad de Administración de la Universidad de Damasco, fue detenido el 3 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército;

- f) Tarek Shurbaji, nacido en 1976 en Darayya, ciudadano sirio, domiciliado en Sahnaya, graduado de la Facultad de Economía de la Universidad de Damasco, fue detenido el 3 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército;
- g) Mou'taz Mourad, nacido en 1978 en Darayya, en donde reside, ciudadano sirio, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Damasco, fue detenido el 3 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército;
- h) Abdel Akram Al-Sakka, nacido en 1944 en Darayya, en donde reside, ciudadano sirio, investigador, escritor y propietario de una editorial, fue detenido el 3 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Se informa de que está gravemente enfermo;
- i) Ahmad Kuretem, nacido en 1977 en Darayya, en donde reside, ciudadano sirio, graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Damasco, fue detenido el 3 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército;
- j) Mohammed Hafez, nacido en 1970 en Darayya, en donde reside, ciudadano sirio, graduado del Instituto de Tecnología, fue detenido el 3 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército;
- k) Moustafa Abou Zeid, nacido en 1967 en Yabroud; ciudadano sirio, domiciliado en Darayya, obrero, fue detenido el 3 de mayo de 2003 en Darayya por integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército;

6. Según la información recibida, estas 11 personas fueron detenidas únicamente por sus convicciones políticas y sociales. Habían convenido en iniciar un programa de "limpieza" de Darayya, y alentaban a los funcionarios públicos a abstenerse de aceptar sobornos y a los conciudadanos de fumar.

7. La fuente añade que estas personas fueron sometidas a presiones físicas y psicológicas después de ser detenidas y durante los interrogatorios, y permanecieron detenidas en régimen de incomunicación durante largos períodos en la cárcel de Sednaya. Se informa de que fueron obligadas a firmar promesas de que renunciarían a sus actividades políticas y religiosas como condición para que se les pusiera en libertad. Posteriormente fueron acusadas de pertenecer a una organización no autorizada. No se les permitió ponerse en contacto con familiares, médicos ni abogados.

8. Algunos meses más tarde, un tribunal militar los juzgó y condenó a penas de tres y cuatro años de prisión. Según la fuente, era la primera vez desde 1984 que un tribunal militar procesaba a civiles por sus actividades sociales. En el juicio no se les permitió tener abogados defensores. No se permitió que ningún familiar asistiera al juicio. No hubo posibilidad de recurrir los fallos, puesto que fueron dictados por un tribunal militar.

9. El Gobierno no ha contradicho las alegaciones de la fuente, pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo.

10. El que se haya impedido a estas personas consultar con un abogado, se haya celebrado el posterior juicio también sin abogado, ante un tribunal militar y sin posibilidad de apelación, constituyen gravísimas vulneraciones del derecho al debido proceso y a un juicio justo reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

11. El motivo de la detención y el hecho de haber sido juzgados y condenados a penas de prisión de entre tres y cuatro años por el simple ejercicio de libertades públicas, constituye también una grave vulneración de los derechos a la libertad de opinión, de expresión y de asociación.

12. En vista de lo que precede, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad de Mohammad Shahadeh, Hassan Qi Kurdi, Bashshar Madamani, Haytham Al Hamoui, Yahia Shurbaji, Tarek Shurbaji, Mou'taz Mourad, Abdel Akram Al-Sakka, Ahmad Kuretem, Mohammed Hafez y Moustafa Abou Zeid es arbitraria porque es contraria a lo que disponen los artículos 9, 10, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a las categorías II y III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

13. Después de emitir esa opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, que podría tener consecuencias irreparables, de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 26 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 7/2004 (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)

Comunicación dirigida al Gobierno el 12 de febrero de 2004

Relativa a Janie Model

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado la información solicitada.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente, pero ésta no presentó sus observaciones al Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias del caso en el contexto de las denuncias formuladas y de la respuesta del Gobierno a esas denuncias.
5. Según la comunicación, Janie Model, ciudadano británico, fue detenido en noviembre de 1999 en Dubai. Tras ser declarado culpable de utilización fraudulenta de tarjeta de crédito fue condenado a pena de prisión y sigue recluso. En diciembre de 2003 fue amnistiado y se pidió a los familiares que le procurasen un billete de vuelta al Reino Unido. No obstante, posteriormente, las autoridades le informaron de que no sería puesto en libertad si no pagaba una multa de 94.000 dirhams de los E.A.U. (equivalente a unos 25.000 dólares de los EE.UU.), suma que ni él ni su familia podían pagar. Según la fuente la detención pasó a ser arbitraria el día en que se le concedió la amnistía.
6. La respuesta del Gobierno al Grupo de Trabajo contiene la siguiente información. Model fue procesado y declarado culpable no sólo de un delito de utilización fraudulenta de tarjeta de crédito, como sostiene la fuente, sino de seis delitos distintos. Fue condenado a seis años de reclusión en total. Además, fue condenado a pagar 600.000 dirhams o, en caso de no pagar la multa, a cumplir otra pena de seis años de prisión, a partir del último día de la pena de prisión que termina el 19 de junio de 2007. La respuesta del Gobierno no indica si llegó a ordenarse el cumplimiento de la segunda pena de seis años de prisión por impago de la multa. No obstante, la información del Gobierno no deja lugar a dudas: "Esta persona estaba incluida en el decreto dictado por su Alteza Sheij Mohammed Bin Rashid Al Maktum, Príncipe Heredero de Dubai y Ministro de Defensa con motivo del mes de Ramadán y de la fiesta del Id al Fitr. No obstante, la puesta en libertad se suspendió porque estaba involucrado en un caso civil".
7. En 2002, el Grupo de Trabajo aprobó la opinión N° 16/2002 (George Atkinson, Emiratos Árabes Unidos), donde los hechos eran similares a los de la presente comunicación. Consciente de la importancia de una jurisprudencia coherente, el Grupo de Trabajo examinó minuciosamente los hechos de este caso a la luz de las conclusiones del caso Atkinson. Consideró que en un punto importante había una diferencia notable entre los dos. El motivo por el que se le negó la libertad fue que, aunque al haber cumplido las tres cuartas partes de la pena

de prisión reunía las condiciones para que lo pusieran en libertad según el artículo 41 de la Ley Federal N° 43, que dispone que toda persona condenada a una pena restrictiva de la libertad por un período de un mes o más, deberá ser puesta en libertad al cumplir las tres cuartas partes del período de la pena, Atkinson no había cumplido con su obligación de abonar la multa que se le había impuesto.

8. En cambio, Model tenía derecho a ser puesto en libertad sobre la base de un decreto de amnistía y no por haber cumplido las tres cuartas partes de la pena. El Gobierno no mencionó término concreto alguno del decreto que excluyera a un preso de la amnistía por no cumplir una obligación pecuniaria subsidiaria impuesta por el tribunal de sentencia. El único motivo para excluir a Model de la amnistía fue su supuesta implicación en una demanda civil que, aparentemente, no tenía nada que ver con su condena penal. Además, el Gobierno no invocó ninguna base jurídica que explicase cómo y por qué el hecho de tener pendiente un asunto civil podía impedir que alguien fuese puesto en libertad después de ser amnistiado.

9. El Grupo de Trabajo considera que una deuda o un juicio de derecho civil pendiente puede excepcionalmente llevar a limitar de algún modo la libertad del deudor de abandonar el país hasta tener la garantía de que pagará la deuda. No obstante, en el marco del derecho internacional no se justifica que se postergue la puesta en libertad tras una amnistía o indulto.

10. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo expresa la siguiente opinión:

La privación de libertad de Janie Model con posterioridad a la fecha en que debería haber sido puesto en libertad, tras ser amnistiado, es arbitraria porque es contraria a lo que dispone el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

11. Por consiguiente, y después de emitir esa opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Model, de conformidad con las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo alienta a adoptar las iniciativas adecuadas para que los Emiratos Árabes Unidos se adhieran al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 27 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 8/2004 (REPÚBLICA DE MOLDOVA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de enero de 2004

Relativa a Andrei Ivantoc

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que, en su respuesta, el Gobierno no le haya facilitado la información relativa a las denuncias de la fuente.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. El Grupo de Trabajo ha llamado la atención del Gobierno sobre la comunicación, pero éste no le facilitó la información que le hubiera permitido adoptar una posición sobre el fondo de la comunicación. La respuesta del Gobierno ha sido transmitida a la fuente, que no formuló observaciones al respecto.
5. Según la información presentada al Grupo de Trabajo por la fuente, Andrei Ivantoc, nacido en 1961, ciudadano rumano desde 2001, ex miembro del Frente Popular de Moldova contrario al separatismo de Transnistria y a las autoridades de la autoproclamada República Moldava del Dniester, está detenido arbitrariamente en Tiraspol desde hace más de 11 años.
6. Ivantoc fue detenido el 2 de junio de 1992 en Tiraspol, tras el conflicto armado en los territorios orientales de Moldova. En 1993, se le acusó de alta traición y de "acciones de terrorismo contra el poder soviético". Se aduce que estas acusaciones tienen motivos políticos y que se han presentado por la oposición de Ivantoc a la secesión de Transnistria. El 9 de diciembre de 1993, Ivantoc fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal de la República Moldava del Dniester. Se dio la orden de confiscar sus bienes y propiedades personales.
7. Según la fuente, el tribunal que condenó a Ivantoc no tiene jurisdicción ni competencia. Era un tribunal ilegítimo establecido por la administración de una entidad política no reconocida. Por consiguiente, su detención es ilegal.
8. Además, se ha vulnerado gravemente el derecho del Sr. Ivantoc a las garantías legales. Estas violaciones comprenden la denegación del derecho a un asesor letrado, acusaciones por motivos políticos y graves malos tratos durante la reclusión. Fue víctima de torturas, de privación de alimentos y de atención médica, y recibió palizas inopinadas. Ivantoc está actualmente confinado en una celda de aislamiento y sin calefacción ni ropa adecuada. Se le mantiene detenido prácticamente en régimen de incomunicación, se le niega la atención médica y el contacto con la familia y el mundo exterior.
9. La fuente añade que Ivantoc está en observación médica por desórdenes de tipo psiquiátrico y fisiológico. El 28 de diciembre de 2003 empezó una huelga de hambre cuando las autoridades penitenciarias se negaron a entregarle los alimentos y el gorro de invierno enviados por su esposa.

10. La fuente añade que las autoridades moldovas son responsables de estas violaciones de los derechos humanos porque no han adoptado las medidas necesarias para ponerles fin.

El Gobierno de la República de Moldova no ha adoptado una posición activa para velar por que se observen en Transnistria las garantías fundamentales contra la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos de los detenidos. Esta conducta debería ser parte de sus funciones de supervisión de la observancia de las normas de derechos humanos en todo el territorio bajo su jurisdicción, aun cuando las autoridades de Chisinau no puedan reglamentar la actuación de la organización administrativa establecida *de facto* en Tiraspol.

11. En su respuesta, el Gobierno mencionó el caso de *Ilascu c. la República de Moldova y la Federación de Rusia*, en que uno de los demandantes es el Sr. Ivantoc. Este caso fue presentado en 1999 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sigue pendiente. El Gobierno, que alega que toda decisión del Grupo de Trabajo en este caso causaría un conflicto de competencia entre los dos mecanismos internacionales de derechos humanos, informó al Grupo de Trabajo de que facilitará la información solicitada cuando el Tribunal Europeo haya finalizado el examen del caso.

12. La fuente no ha formulado comentario alguno sobre la respuesta del Gobierno, aunque el Grupo de Trabajo le haya invitado a hacerlo.

13. El Grupo de Trabajo examinó en primer lugar si el caso que está pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es idéntico a la comunicación que se le presentó. Sobre la base de la decisión de admisibilidad de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptada el 4 de julio de 2001, determinó que el objeto de una de las demandas presentadas a ese Tribunal en nombre del Sr. Ivantoc es su detención arbitraria. Por lo tanto, esta parte de la demanda al Tribunal Europeo parece coincidir con las denuncias que la fuente presentó al Grupo de Trabajo.

14. El Grupo de Trabajo, basándose en el párrafo 25 de sus métodos de trabajo, no considera que el mero hecho de que una demanda idéntica o la misma esté pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le impida examinar la comunicación.

15. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República de Moldova es Parte, dispone en su artículo 2 que cada Estado Parte en el Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto.

16. Al examinar la presente comunicación cabe formular, en primer lugar, la siguiente pregunta ¿cómo puede un Estado que ha sido despojado, por la fuerza y contra su voluntad, de su capacidad, en el sentido material, de ejercer su poder soberano en una entidad territorial, cumplir las obligaciones que impone el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Y ¿en qué condiciones podría pedírsele que rinda cuentas de la violación de los derechos humanos que se hayan cometido en la entidad territorial en la que, por la fuerza, se le

impide ejercer el control? En este contexto, el Grupo de Trabajo señala que la propia fuente reconoce que las autoridades de la República de Moldova no pueden reglamentar la actuación de la organización administrativa establecida *de facto* en Tiraspol, donde Ivantoc está encarcelado.

17. No obstante, teniendo en cuenta que ni la fuente ni el Gobierno facilitaron al Grupo de Trabajo información suficiente que le permita examinar los hechos y circunstancias pertinentes del caso, sobre los cuales basar su opinión, el Grupo de Trabajo decide, remitiéndose al apartado d) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo, archivar provisionalmente el caso.

Aprobada el 27 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 9/2004 (MYANMAR)

Comunicación dirigida al Gobierno el 27 de octubre de 2003

Relativa a Daw Aung San Suu Kyi

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. A la luz de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo celebra la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente de la comunicación, que ha hecho llegar sus comentarios al respecto.
5. De conformidad con la información recibida, la Sra. Daw Aung San Suu Kyi, Secretaria General del partido político Liga Democrática Nacional y Premio Nobel de la Paz, fue arrestada el 31 de mayo de 2003 en Yawayoo, en la parte septentrional de Myanmar, tras graves incidentes ocurridos cerca de Depaying, en el distrito de Sagaing.
6. La Sra. Daw Aung San Suu Kyi fue, al parecer, trasladada a la prisión de Insein y, posteriormente, a una residencia militar al norte de Yangon. Permanece detenida sin cargos. No tiene acceso a parientes o abogados. Se le ha permitido solamente recibir visitas de observadores independientes.
7. La fuente añade que la Sra. Daw Suu Kyi, al parecer, permanece detenida con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 a 9 y 10 a 15 de la Ley de Protección del Estado de 1975. Se informa que, con arreglo a esta ley, cualquier persona que se considere una amenaza para la seguridad del Estado puede ser detenida sin cargos y juicio, y sin que quepa la posibilidad de interponer una apelación judicial, por un período de hasta cinco años.
8. El Gobierno respondió al Grupo de Trabajo en tres cartas diferentes. La primera de ellas, de fecha 27 de junio de 2003, se refiere al llamamiento urgente remitido por el Grupo el 2 de junio del pasado 2003. La segunda de ellas, de fecha 1° de septiembre de 2003, parece responder fundamentalmente a otro llamamiento urgente enviado por el Grupo el 18 de julio de 2003. La tercera es una nota verbal de fecha 14 de mayo de 2004 y contiene la respuesta a la comunicación del Grupo de Trabajo de 27 de octubre de 2003.
9. Según la respuesta del Gobierno, la Sra. Daw Aung San Suu Kyi no ha sido arrestada, sino puesta bajo custodia por su propia seguridad. Esta protección, a juicio del Gobierno, habría sido necesaria con ocasión del incidente sucedido el 30 de mayo del pasado año 2003 entre partidarios y oponentes de la Sra. Daw Aung San Suu Kyi.

10. El Gobierno relata también las actividades que la Sra. Daw Aung San Suu Kyi había mantenido desde junio de 2002 hasta abril de 2003 y cómo el propio Gobierno le había facilitado su tarea como Secretaria General de la Liga Nacional para la Democracia, otorgándole el tratamiento de persona distinguida. Pero en la actualidad, y como consecuencia de actividades de sus partidarios y de miembros del partido, se habían dado actos ilegales y violentos que habían causado disturbios que ponían en peligro el proceso de reconciliación nacional.

11. El Gobierno informa que la Sra. Daw Aung San Suu Kyi había recibido las visitas del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas y del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos para ese país. También ha mantenido reuniones con representantes de su partido y se le ha facilitado asistencia médica, incluyendo su hospitalización en un centro médico privado de Yangon en septiembre de 2003.

12. Según el Gobierno, la legislación interna le habría permitido iniciar acciones legales contra esta persona. Ha preferido sin embargo adoptar una actitud magnánima y le brinda protección, por el propio bien de esta persona.

13. La fuente discrepa de la información brindada por el Gobierno. Manifiesta que la Sra. Daw Aung San Suu Kyi se encuentra detenida y que la pretendida retención en su domicilio para su protección es absolutamente contra su voluntad. Añade que la línea telefónica del lugar en el que se encuentra confiada ha sido desconectada. No es posible mantener a una persona en detención por razones de protección durante un año. Según la fuente, la razón para mantenerla en detención sería simplemente impedirle desempeñar una función efectiva como dirigente de la oposición.

14. El Grupo de Trabajo, con anterioridad, ya había emitido dos opiniones (decisión N° 8/1992 y opinión N° 2/2002) en las que había declarado arbitrarias las detenciones sufridas por la Sra. Daw Aung San Suu Kyi. Así pues, en la actualidad la Sra. Daw Aung San Suu Kyi continúa privada de su libertad, sin ningún tipo de cargo y sin ser sometida a juicio, sujeta a todo tipo de limitaciones en sus comunicaciones y visitas, cuya autorización queda al arbitrio del Gobierno.

15. Por lo tanto, la situación en la que la Sra. Daw Aung San Suu Kyi se encuentra constituye una vulneración del artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin que pueda valer como justificación de ningún orden el que esa privación pueda ser en su beneficio, para su protección o para evitar enfrentamientos o cualquier otro tipo de incidentes. Ningún ser humano puede ser privado arbitrariamente de su libertad. Se trata de la tercera vez, desde 1990, en que la Sra. Daw Aung San Suu Kyi es sometida a detención domiciliaria, sin haber sido acusada ni sometida a juicio alguno.

16. Teniendo en cuenta todo lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Daw Aung San Suu Kyi es arbitraria, al contravenir el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría I de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

17. En consecuencia, y teniendo en cuenta la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner remedio a esta situación, y hacerla conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como para adoptar iniciativas adecuadas con miras a pasar a ser Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 28 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 10/2004 (MALASIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 20 de febrero de 2004

Relativa a Muhammad Radzi bin Abdul Razak, Nurul Mohd Fakri bin Mohd Safar, Mohd Akil bin Abdul Raof, Eddy Erman bin Shahime, Muhammad Ariffin bin Zulkarnain, Abi Dzar bin Jaafar, Falz Hassan bin Kamarulzaman, Mohd Ikhwan Abdullah y Shahrul Nizam Amir Hamzah

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido dentro del plazo de 90 días ni haya proporcionado ninguna información sobre el caso en cuestión.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo hubiera agradecido la cooperación del Gobierno. Ante la falta de cualquier información procedente del Gobierno, el Grupo de Trabajo cree que está en disposición de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias de los casos, especialmente teniendo en cuenta que los hechos y alegaciones que figuran en la comunicación no han sido refutados por el Gobierno.
5. Los casos que se resumen a continuación han sido comunicados al Grupo de Trabajo como sigue: Muhammad Radzi bin Abdul Razak, de 19 años, Nurul Mohd Fakri bin Mohd Safar, de 17 años, Mohd Akil bin Abdul Raof, de 21 años, Eddy Erman bin Shahime, de 19 años, Muhammad Ariffin bin Zulkarnain, de 18 años, Abi Dzar bin Jaafar, de 18 años, Falz Hassan bin Kamarulzaman, de 17 años, Mohd Ikhwan Abdullah, de 19 años, Shahrul Nizam Amir Hamzah, de 21 años, todos ellos nacionales de Malasia y estudiantes de la Universidad de Estudios Islámicos de Karachi (Pakistán), fueron arrestados por primera vez en Karachi el 20 de septiembre de 2003. Eran sospechosos de participar en las actividades de la organización denominada Jemaah Islamiyah, que ha sido acusada de perpetrar atentados terroristas con bomba en la región del sudeste asiático. Los estudiantes fueron arrestados durante una redada realizada al amanecer en tres escuelas religiosas de Karachi, junto con otros cuatro estudiantes malasios.
6. El 25 de septiembre de 2003, las autoridades de Malasia anunciaron que los 13 estudiantes estaban siendo adiestrados para hacerse con la dirección de la Jemaah Islamiyah. El 10 de noviembre de 2003, las fuerzas de seguridad paquistaníes deportaron a los 13 estudiantes a Malasia, en donde fueron inmediatamente arrestados y detenidos con arreglo a lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 73 y en el artículo 8 de la Ley sobre seguridad interior de 1960 (ISA). Se les mantiene en emplazamientos no desvelados por orden del Ministro del Interior de Malasia, aunque se informa de que están detenidos en el centro de detención de Kamunting. La mencionada ley faculta a la policía para arrestar y detener preventivamente a cualquier persona que amenace la seguridad nacional durante 60 días. Cuando transcurre el primer período de detención de 60 días, el Ministro del Interior puede ampliar la detención preventiva por otros dos años, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la ISA, y posteriormente, de forma indefinida.

7. El 11 de noviembre de 2003, las autoridades policiales de Malasia confirmaron que los 13 estudiantes habían permanecido bajo custodia policial desde su arresto a su regreso al país en un avión especial. Su detención se realizó en virtud de las competencias que figuran en la Ley sobre seguridad interior. El 12 de noviembre de 2003, el Gobierno de Malasia defendió la detención de los estudiantes, aduciendo que había en marcha investigaciones para aclarar sus vinculaciones con la Jemaah Islamiyah. El 24 de noviembre de 2003, 4 de los 13 estudiantes fueron puestos en libertad incondicional. Las personas mencionadas en la comunicación son los nueve restantes, que siguen detenidos.

8. La fuente también indica que, el 22 de noviembre de 2003, los nueve estudiantes se reunieron con sus abogados en la sede de la policía en Kuala Lumpur por primera vez desde su arresto. Los abogados sólo pudieron dedicar 20 minutos a cada estudiante. Oficiales de policía, al parecer, permanecían sentados detrás de los abogados y podían leer y escuchar las entrevistas. Los oficiales de policía, según se informa, escucharon y tomaron notas de las conversaciones entre los detenidos y sus abogados. Según la fuente, la presencia de la policía tenía por objeto intimidar a los detenidos.

9. El 8 de diciembre de 2003, el Ministro del Interior decidió ampliar las órdenes de detención dictadas contra cinco de los estudiantes por otros dos años, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la ISA. Continúan siendo interrogados por la policía. El 9 de diciembre de 2003, Muhammad Ariffin bin Zulkarnain, Falz Hassan bin Kamarulzaman, Sharul Nizam Amir Hamzah y Nurul Fakri bin Mohd Safar fueron puestos en libertad, y sometidos a un mandamiento de restricción de la libertad de movimientos durante dos años. Dicho mandamiento les impide abandonar el distrito al que fueron enviados y les obliga a presentarse ante la policía al menos tres veces al mes. Deben permanecer en sus domicilios durante determinadas horas del día.

10. De conformidad con la fuente, la ISA no debía utilizarse para detener e interrogar a jóvenes, ya que les expone a un elevado riesgo de maltrato físico y psicológico y, en potencia, a tortura. Su detención incomunicada sin juicio constituye una violación de sus derechos humanos fundamentales. Las autoridades deberían hacerlos comparecer ante un tribunal competente e imparcial y presentar pruebas de sus presuntos actos, o ponerlos inmediatamente en libertad si no se dispone de dichas pruebas.

11. El Grupo de Trabajo, sobre la base de la información recibida, que no ha sido refutada por el Gobierno, observa que los cinco estudiantes de Malasia que permanecen detenidos, a saber, Muhammad Radzi bin Abdul Razak, Mohd Akil bin Abdul Raof, Eddy Erman bin Shahime, Abi Dzar bin Jaafar y Mohd Ikhwan Abdullah, fueron aprehendidos en el Pakistán y deportados a Malasia, en donde fueron mantenidos en detención preventiva. Su detención administrativa ha sido ampliada por el Ministro del Interior con arreglo a una ley nacional. No se les ha acusado de delitos criminales, ni han tenido la oportunidad de ser sometidos a un juicio justo ante una autoridad judicial independiente.

12. El Grupo de Trabajo considera que la detención administrativa por dicho motivo, incluso siendo conforme a una ley nacional, constituye una denegación de la oportunidad de obtener un juicio justo de una autoridad judicial independiente e imparcial. Además, no se permitió a esas personas designar a un abogado ni ponerse en contacto con sus parientes. Su detención es, por lo tanto, una contravención grave de las normas internacionales y constituye una violación del

derecho al debido proceso de tal gravedad que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario.

13. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

En relación con Muhammad Ariffin bin Zulkarnain, Falz Hassan bin Kamarulzman, Nurul Mohd Fakri bin Mohd Safar y Shahrul Nizam Amir Hamzah, el Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta su puesta en libertad y remitiéndose a lo dispuesto en el apartado a) del artículo 17 de sus métodos de trabajo, decide archivar sus casos.

En relación con Muhammad Radzi bin Abdul Razak, Mohd Akil bin Abdul Raof, Eddy Erman bin Shahime, Abi Dzar bin Jaafar y Mohd Ikhwan Abdullah, su privación de libertad es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

14. En consecuencia, y teniendo en cuenta la opinión emitida, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, haciéndola conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aprobada el 28 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 11/2004 (MADAGASCAR)

Comunicación dirigida al Gobierno el 30 de octubre de 2003

Relativa a Azihar Salim

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle facilitado oportunamente la información necesaria.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. A la vista de las alegaciones formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. La respuesta del Gobierno ha sido transmitida a la fuente, que no ha creído necesario hacer llegar sus observaciones. El Grupo considera que está en disposición de emitir una opinión sobre los hechos y circunstancias relativos al caso en cuestión, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas y la respuesta proporcionada por el Gobierno al respecto.
5. Según la información recibida, el Sr. Azihar Salim fue arrestado el 27 de junio de 2003 en su domicilio situado en Nosy-Be por una veintena de soldados que no exhibieron ningún mandamiento de arresto y sin que se hubiera realizado una investigación preliminar. No se le informó de las razones de su arresto.
6. La fuente menciona que el Sr. Salim fue golpeado y maltratado físicamente por los soldados, que confiscaron sus pertenencias personales. Primeramente permaneció detenido en una celda de la comisaría de policía de Nosy-Be. Una semana después, fue transferido por avión a la capital y colocado bajo arresto en la brigada especial de Betongolo. La fuente alega que durante su traslado en avión fue nuevamente maltratado físicamente y recibió una paliza.
7. El 13 de julio de 2002, el Sr. Salim y sus compañeros de detención fueron interrogados por la policía. El 17 de julio de 2002, el Sr. Salim fue inculcado por el Tribunal de Antananarivo y colocado en detención preventiva en la prisión de Tsiafahy. Fue acusado de haber proporcionado ayuda logística a la administración local fiel al ex Presidente Didier Radsiraka durante el período de la crisis política transcurrido entre febrero y junio de 2002.
8. La fuente añade que el Sr. Salim no pudo recibir asistencia letrada durante su interrogatorio por la policía y por el juez. Sus parientes no habrían tenido acceso a los centros de detención durante el período de instrucción sobre las supuestas infracciones. La fuente afirma que Azihar Salim y los otros detenidos fueron arrestados simplemente por un arreglo de cuentas político o personal y que, transcurridos 16 meses desde su detención, siguen detenidos sin juicio.
9. La fuente consagra una parte de esa comunicación a describir las malas condiciones de detención y el hacinamiento en la prisión en la que está detenido Azahir Salim, y añade que no se le ha otorgado ningún régimen especial, distinto al de los prisioneros de derecho común.

10. Según la respuesta presentada por el Gobierno de Madagascar, el Sr. Azihar Salim fue juzgado el 15 de diciembre de 2003 y condenado a dos años de prisión. Fue detenido por agentes de la gendarmería, y posteriormente interrogado sobre los hechos de los que se le acusa. Fue hecho comparecer ante el juez para su interrogatorio, y posteriormente ingresado en prisión preventiva el 17 de julio de 2002. Su inculpación se basa en las infracciones estipuladas en el artículo 263 (delitos contra la paz) del Código Penal malgache, que están castigadas en virtud del artículo 266 (con pena de trabajos forzados, prisión entre seis meses y cinco años y multa de 180.000 francos malgaches como mínimo).

11. El Gobierno de Madagascar añade que la situación de la persona detenida se rige por lo dispuesto en el artículo 334 *bis* del Código de Procedimiento Penal malgache, que dispone lo siguiente: "Tanto si se trata de un delito como de un crimen, la duración de la validez del mandamiento de prisión preventiva dictado por un juez de instrucción o por la sala encargada de adoptar una decisión sobre la detención preventiva queda fijada en ocho meses a contar desde la fecha de su notificación. Otro tanto se aplica a la orden de prisión preventiva desde que el inculpado haya sido aprehendido...". Por último, se defendieron los intereses del Sr. Salim, tanto durante la instrucción como durante el proceso, habiéndose beneficiado éste de la asistencia de varios abogados.

12. De lo que precede se deduce que la fuente plantea diversos agravios, de los cuales los que más atañen al mandato del Grupo de Trabajo son los de arresto ilícito y privación del derecho a recibir asistencia letrada de un abogado. Ahora bien, en su respuesta, el Gobierno pone en cuestión las informaciones que provienen de la fuente y ésta, habiendo sido no obstante debidamente informada de la respuesta del Gobierno, no ha considerado necesario hacer llegar sus comentarios al Grupo de Trabajo.

13. El Grupo de Trabajo considera pues que, si bien determinados hechos, especialmente durante el arresto y el interrogatorio del Sr. Salim por la policía, pueden constituir un atentado a sus derechos fundamentales, parecería, según las informaciones no cuestionadas por la fuente, que el Sr. Salim fue juzgado por hechos considerados delictivos con arreglo a la ley nacional en vigor y ha podido beneficiarse de la asistencia de varios abogados, tanto durante la etapa de la instrucción como durante el proceso. El carácter arbitrario de la detención del Sr. Salim no ha quedado, pues, fundamentado.

14. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la opinión siguiente:

La detención del Sr. Azihar Salim no es arbitraria.

15. Tras haber emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso, de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 17 de sus métodos de trabajo revisados.

Aprobada el 27 de mayo de 2004

OPINIÓN N° 12/2004 (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 9 de octubre de 2003

Relativa a Dianellys Morato

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo observa con agradecimiento la información presentada por el Gobierno en relación con los casos en cuestión.
3. El Grupo de Trabajo observa además que el Gobierno le ha informado de que la Sra. Dianellys Morato fue puesta en libertad el 8 de enero de 2004.
4. La respuesta del Gobierno fue transmitida a la fuente, que no hizo llegar ningún comentario.
5. Tras haber examinado la información disponible, y sin perjuicio de la naturaleza de la detención, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso de Dianellys Morato con arreglo a lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 15 de septiembre de 2004

OPINIÓN N° 13/2004 (BOLIVIA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 5 de febrero de 2004

**Relativa a Francisco José Cortés Aguilar, Carmelo Peñaranda Rosas y
Claudio Ramírez Cuevas**

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su reconocimiento al Gobierno por haber proporcionado la información solicitada oportunamente.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo ha transmitido la respuesta del Gobierno a la fuente de las informaciones. El Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca de los hechos y circunstancias del caso considerado, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas y la respuesta del Gobierno sobre ellas.
5. Los casos que se mencionan a continuación fueron denunciados al Grupo de Trabajo como sigue, con las siguientes personas implicadas:
 - a) Francisco José Cortés Aguilar, ciudadano colombiano; con cédula de ciudadanía N° 79.584.240; de 41 años de edad; antiguo dirigente campesino y sindical en Colombia; miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR); Director General de la Corporación Social para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria (COSPACC); participante en el Programa de Protección de Testigos del Ministerio del Interior de Colombia;
 - b) Carmelo Peñaranda Rosas; de 30 años de edad; campesino; dirigente de la organización política Movimiento de Ascensión al Socialismo (MAS) en Cochabamba;
 - c) Claudio Ramírez Cuevas, campesino, ex alcalde de la Asunta (Yungas), quien hospedaba en su domicilio a Cortés Aguilar.
6. Se informa que estas tres personas se encuentran en situación de detención preventiva en el penal de máxima seguridad para condenados en Chonchocoro, en ciudad del El Alto, La Paz. Según la fuente, estas tres personas fueron arrestadas el 10 de abril de 2003 en horas de la madrugada, mientras se encontraban en la vivienda de Claudio Ramírez Cuevas en Villa Adela, ciudad de El Alto, por miembros encapuchados de Inteligencia Militar (Centro de Investigación Especial del Estado) quienes portaban metralletas y otras armas automáticas. El arresto se produjo en el marco de un operativo denominado "Operación Alerta Temprana". Luego de su detención, fueron trasladados a la sede de la Inteligencia Militar, con las manos atadas y los ojos vendados.

7. La fuente precisa que Cortés Aguilar no tiene ningún antecedente como subversivo o terrorista en Colombia. Ha sido varias veces amenazado en su país por miembros de organizaciones paramilitares, por lo que decidió exiliarse con su familia en Bolivia. En 2001, hizo un primer viaje de seis días a dicho país con el objeto de participar en una conferencia internacional de la organización alter mundialista "Acción Global de los Pueblos". Regresó a Bolivia en 2002 para iniciar los trámites de adquisición de una vivienda. Viajó por tercera vez en abril de 2003 para concretar la compra de la casa y atender una invitación de organizaciones sociales bolivianas. Seis días después de su llegada fue detenido.

8. Cortés Aguilar fue presentado a la prensa como guerrillero miembro de la organización colombiana autodenominada Ejército de Liberación Nacional (ELN), y se afirmó que había viajado a Bolivia para organizar un grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional Boliviano (ELN-B) e impartir adoctrinamiento castrista. Cortés Aguilar negó cualquier vinculación con organizaciones subversivas.

9. En el operativo del 10 de abril de 2003, fueron también arrestadas las menores Nelly Ramírez, de 17 años de edad, hija de Claudio Ramírez Cuevas y su prima, Betty Nina Díaz, también de 17 años. Un recurso de *habeas corpus* habría sido interpuesto en julio de 2003 ante el Tribunal Constitucional a favor de estas menores. El Tribunal Constitucional habría ordenado su libertad inmediata.

10. Según la fuente, las autoridades presentaron ante la prensa como pruebas inculpatorias, uniformes militares; una bandera del ELN; fotos de Cortés Aguilar con Evo Morales, dirigente del MAS; libros de Lenin y Mao Zedong; 4.000 dólares de los EE.UU.; y dos kilos de pasta básica de cocaína. Según los detenidos, la droga habría sido colocada en la casa por sus captores al momento de los arrestos. Éstos habrían intentado también colocar en el lugar artefactos explosivos conocidos como "cazabobos", pero los vecinos lo habrían impedido. El dinero encontrado pertenecería a Cortés Aguilar, quien lo habría llevado a Bolivia con el objeto de invertirlo en la compra de su vivienda. Sin embargo, fue presentado ante la prensa como dinero producto del narcotráfico y como supuesta prueba de financiación de una organización guerrillera. Se afirma que estos hallazgos fueron presentados a la prensa varias horas después de producidos los arrestos y el allanamiento de la vivienda.

11. Se informa también que, de acuerdo a la ley boliviana, el fiscal debió haber formulado acusación en el plazo de seis meses, lo que no hizo. En su lugar, pidió al juez una extensión de dicho plazo. Ello se debería, según la fuente de la comunicación, a la ausencia de pruebas firmes. Luego de su arresto, estas personas fueron puestas en situación de incomunicadas y en confinamiento solitario, situación que habría durado dos meses.

12. La fuente añade que estas personas habrían sido detenidas exclusivamente por razones políticas, en el marco de una confrontación entre el Gobierno del entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el MAS. El mantenimiento en detención de estas personas, pese a la huida de Sánchez de Lozada a los Estados Unidos y al posterior cambio de Gobierno, sería producto de una situación de inercia por parte de las autoridades judiciales y fiscales. Añade que el entonces Ministro de Gobierno pretendió utilizar la detención de estas personas como prueba de que el MAS estaba involucrado en actividades de narcoterrorismo, lo que dicha organización habría refutado inmediatamente a través de las declaraciones de sus voceros parlamentarios.

13. La fuente añade que la captura de estas personas habría sido también políticamente aprovechada por el entonces partido gubernamental en El Chapare, donde se habrían distribuido fotos de Cortés Aguilar, presentado como narcotraficante, con Evo Morales, con el objeto de atacar a este último. El operativo "Operación Alerta Temprana" fue presentado en su momento como un golpe oportuno para evitar el surgimiento del terrorismo en el país.
14. Los abogados bolivianos de Cortés Aguilar habrían recibido amenazas de muerte. Se les habrían negado copias del expediente judicial y de las pruebas de cargo. Esto mostraría una situación de obstrucción al derecho a la defensa, a la contradicción probatoria y al debido proceso. La fuente concluye que estas personas han sido detenidas solamente por motivos de política interna partidista, con el objeto de mostrar ante la prensa éxitos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y socavar el prestigio del MAS y de sus dirigentes.
15. El Gobierno, en su respuesta, dice que se ha seguido una investigación del Ministerio Público contra Francisco Cortés Aguilar y otros, con arreglo a la normativa del Código de Procedimientos Penales de 1999, de corte acusatorio y de gran respeto a las garantías y derechos de los imputados. Ha dicho que la detención fue realizada por orden del Juez de Instrucción de la ciudad de La Paz, con los procedimientos establecidos, siendo dicha detención observada por los medios de prensa.
16. El Gobierno dice que no ha presentado a Francisco Cortés a la prensa, sino que luego de la audiencia de medidas cautelares, la prensa ha solicitado al imputado una conferencia de prensa donde fue el propio Cortés quien refirió que lo habían detenido bajo la acusación de ser guerrillero y por una supuesta vinculación con el ELN de Colombia.
17. El Gobierno dice que la detención de las menores Nelly Ramírez y Betty Nina Díaz no está vinculada a la acción contra Francisco Cortés, sino a la seguida por el ministerio público por el tráfico de sustancias controladas. Dice también que los elementos de convicción respecto a la posible responsabilidad de Francisco Cortés y otros imputados ya fueron judicializados con la presentación de la imputación formal presentada por el ministerio público. En la intervención del domicilio de Claudio Ramírez donde se detuvo a Francisco Cortés han participado los fiscales de la causa y con la presencia de la prensa nacional.
18. El Gobierno dice que en el artículo 134 del Código de Procedimientos Penales se establece que "cuando la investigación sea compleja en razón a que los hechos se encuentran vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales, el fiscal podrá solicitar al juez de la instrucción la ampliación de la etapa preparatoria hasta un máximo de dieciocho meses". Con esta cobertura legal, el fiscal de la causa ha solicitado la ampliación conforme a la ley, habiendo ampliado el juez de la instrucción y cautelar el plazo de la etapa preparatoria.
19. El Gobierno dice que para el ministerio público no ha sido evidente que los imputados estuviesen incomunicados por dos meses. Dice también que el ministerio público no tiene participación en una supuesta politización del caso. Dice además que el acceso a los elementos de convicción recogidos por el ministerio público pasa a ser competencia judicial al momento de la audiencia de medidas cautelares. Dice que sin embargo, el cuaderno investigativo es público y pueden acceder a él las partes interesadas en cualquier momento, a simple solicitud del fiscal de la causa o en su caso ante el fiscal del distrito y finalmente ante el juez instructor, por lo que resulta no ser evidente la falta de acceso argüida.

20. El Gobierno finaliza diciendo que las supuestas relaciones existentes entre los imputados y el partido político denominado Movimiento de Ascensión al Socialismo (MAS), no están incorporadas dentro de la investigación penal seguida por el ministerio público. No hubo arresto de los imputados por efectivos de la Inteligencia Militar, el arresto y posterior detención fue realizada por la Policía Nacional, en ejercicio de policía judicial.

21. El Grupo de Trabajo considera que para emitir una opinión debería recibir información complementaria tanto de la fuente como del Gobierno, respecto a los siguientes puntos:

- a) La legislación en base a la cual se sustenta la tipificación y la naturaleza de la acusación hecha por el ministerio público y su penalidad en caso de que los acusados fuesen condenados;
- b) Información sobre si los acusados han recurrido a algún tipo de violencia;
- c) La fase judicial en que se encuentra actualmente el proceso y las acciones a las que pueden recurrir los acusados.

22. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo, de acuerdo con sus métodos de trabajo establecidos en el apartado c) de su artículo 17, decide mantener el caso en examen a la espera de recibir información pertinente.

Aprobada el 15 de septiembre de 2004

OPINIÓN N° 14/2004 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 3 de noviembre de 2003

Relativa a Jae Hyun Seok

El Estado ha firmado pero no ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo observa con aprecio la información recibida del Gobierno en relación con el caso en cuestión dentro de los 90 días transcurridos desde el envío de la carta por el Grupo de Trabajo.
3. El Grupo de Trabajo observa además que la fuente ha informado al Grupo de que la persona mencionada ya no está detenida.
4. Tras haber examinado la información disponible, y sin prejuzgar la naturaleza de la detención, el Grupo de Trabajo decide archivar el caso de Jae Hyun Seok con arreglo a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 15 de septiembre de 2004

OPINIÓN N° 15/2004 (CHINA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 23 de octubre de 2003

Relativa a Huang Qi

El Estado ha firmado pero no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haberle remitido a su debido tiempo la información requerida.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo se felicita de la cooperación del Gobierno. El Grupo de Trabajo transmitió a la fuente la respuesta enviada por el Gobierno y recibió las observaciones de aquélla.
5. El Grupo de Trabajo cree que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, teniendo en cuenta las denuncias formuladas y las respuestas del Gobierno a ellas, así como las observaciones formuladas por la fuente.
6. Con arreglo a la información recibida, el Sr. Huang Qi, de 40 años, residente en Chengdu Shi (Sichuan Sheng), que anteriormente desempeñaba la función de ingeniero informático, fue arrestado el 5 de junio de 2000 en su domicilio por cuatro agentes de la División de Seguridad Política de la Oficina de Seguridad Pública de Chengdu.
7. Huang Qi creó dos sitios web: Scream Online y Tianwang Web. En este último se publicaron diversos artículos relativos a asuntos de interés social, como la situación de 200 pescadores de la provincia de Sichuan y las manifestaciones que tuvieron lugar en la plaza de Tiananmen en 1989. Como consecuencia de esta actividad, ya antes de su detención, Huang Qi recibió amenazas de funcionarios del gobierno provincial y la Oficina de Seguridad Pública de Chengdu cerró el sitio Tianwang Web. Ese sitio web, sin embargo, fue posteriormente relanzado por otras personas, quienes publicaron artículos relativos a la muerte en prisión de practicantes de Falun Gong y a la organización denominada Partido para la Democracia de China.
8. Huang Qi fue arrestado sin mandamiento de detención y posteriormente fue acusado de pretender atacar contra la unidad nacional organizando movimientos separatistas y de organizar y llevar a cabo actividades subversivas orientadas a derrocar el sistema socialista. El 14 de agosto de 2001, el Sr. Huang Qi fue juzgado por el Tribunal Intermedio de Chengdu en Sichuan. El juicio se celebró a puerta cerrada. No se permitió que asistieran familiares ni miembros de la prensa. Solamente se permitió la presencia de sus dos abogados. Éstos habían sido autorizados a mantener una única entrevista con Huang Qi antes del juicio.

9. El 9 de mayo de 2003, cerca de tres años después de su detención, el Tribunal Intermedio de Chengdu en Sichuan condenó a Huang Qi a cinco años de prisión. Sólo se le concedieron diez días para interponer recurso de apelación, que aún está sub júdice.

10. Mientras Huang Qi estuvo detenido en el centro de detención N° 1 de la Oficina de Seguridad Pública de Chengdu, fue golpeado brutalmente; le causaron lesiones en los testículos y en la cara; le rompieron un diente, pero no se le suministró ningún tipo de medicina para curar esas heridas. Se informa también que sus familiares no fueron autorizados a visitarle.

11. El Gobierno contesta los hechos expuestos por la fuente. En síntesis, el Gobierno afirma lo siguiente:

- a) Admitió que, efectivamente, Huang Qi fue arrestado el 5 de junio de 2000, pero afirma que sí hubo orden de arresto y que su familia fue oportunamente notificada del mismo. El Gobierno señala que los motivos por los que se detuvo a esta persona fueron difundir en Internet rumores, difamaciones y otros contenidos para incitar a las masas a actuar contra la autoridad política del Estado.
- b) En lo que se refiere a las irregularidades que la fuente denunció sobre la tardanza en celebrarse el juicio, el Gobierno afirma que éste empezó el 13 de febrero de 2001 y que, efectivamente, por razones procesales, tuvo que realizarse a puerta cerrada, dado que el caso afectaba asuntos relativos a la seguridad del Estado. Sin embargo, la lectura de las sentencias se hizo en audiencias públicas, que fueron oportunamente anunciadas.
- c) El juicio tuvo que suspenderse atendiendo a consideraciones relativas al estado de salud de Huang Qi. El juicio se reanudó una vez restablecida la salud de esta persona. Finalmente, el 9 de mayo de 2003, Huang Qi fue condenado a cinco años de prisión.
- d) La suspensión del juicio de Huang Qi fue, según el Gobierno, no sólo atendiendo a que disposiciones legales la permitían, sino básicamente por razones humanitarias. Además, durante el desarrollo del juicio se tuvieron noticias de posibles nuevos hechos por los que Huang Qi podría ser acusado, por lo que se volvieron a calcular los plazos legales de investigación y se estimó que podrían ser más largos. Esto se hizo de conformidad con el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal.
- e) Respecto a la supuesta falta de visitas por parte de la familia, que la fuente había denunciado, el Gobierno informó que mientras Huang Qi estuvo en detención preventiva su familia le trajo dinero y regalos, pero que nunca pidió permiso para verle. No hubo pues tal denegación de autorización de visitas. Sus dos abogados pudieron reunirse con él hasta en cuatro ocasiones y pudieron ejercer plenamente su derecho a la defensa.
- f) Respecto a la afirmación de la fuente en relación con los supuestos malos tratos sufridos en el centro de detención de Chengdu, éstos son rotundamente negados. El Gobierno explica las distintas disposiciones legales adoptadas en China para incorporar a la legislación nacional las disposiciones aprobadas por las Naciones

Unidas contra la tortura y los malos tratos. Informa el Gobierno que una vez, mientras Huang Qi estuvo en Chengdu, para evitar ser interrogado, se causó lesiones con un bolígrafo.

- g) El Gobierno añade que Huang Qi no aceptó la sentencia e interpuso recurso de apelación. El 7 de agosto de 2003 el Tribunal Supremo de Sichuan confirmó la sentencia.
- h) El Gobierno concluye que la detención, juicio y condena de Huang Qi es plenamente conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues en ella se establece que la libertad de expresión puede quedar sujeta a las limitaciones que dispongan las leyes. Huang Qi vertió rumores falsos y difamaciones a través de la Internet para incitar a la subversión contra la política del Estado y esto, en la opinión del Gobierno, nada tiene que ver con el ejercicio pacífico de la libertad de expresión.

12. La fuente agradece la extensión y precisión de la respuesta del Gobierno, aunque discrepa de elementos esenciales de la misma, por lo siguiente:

- a) La gran dilación en el proceso de Huang Qi no se debió a sus problemas de salud, ya que el mayor período de dilación se produjo una vez acabada la vista, y antes de que se dictara sentencia. Desde que comenzó el juicio oral el 13 de febrero de 2001 hasta que se dictó sentencia el 9 de mayo de 2003 transcurrieron más de dos años, cuando según la propia legislación china, la duración, desde el inicio del juicio oral a la sentencia no puede ser superior, en el mayor de los casos, a cuatro meses y medio. En todo caso, no se ha acreditado que los nuevos cargos que según el Gobierno se le imputaron durante el juicio, determinara una justificada dilación de su procedimiento. Los únicos delitos por los que se le condenó fueron los que se tipifican en los artículos 103 a 105 del Código Penal de la República Popular de China, es decir, los mismos contenidos en el acta de acusación inicial.
- b) No se ha acreditado tampoco que las razones de salud de Huang Qi justificaran el aplazamiento del juicio, pues hasta la fecha no se ha investigado el deterioro de su salud como consecuencia de los malos tratos sufridos ni los malos tratos mismos.
- c) En lo que se refiere a la ausencia de visitas de sus familiares, éstos insisten en que efectivamente solicitaron visitarle en varias ocasiones y que, en cada una de ellas, se les denegó el correspondiente permiso.
- d) Respecto a los malos tratos sufridos, éstos fueron ya denunciados al Relator Especial sobre la Tortura de la Comisión de Derechos Humanos en junio del año 2000 y están plenamente acreditados por elementos objetivos, como la cicatriz que presenta en la cabeza, la ausencia del diente que perdió y el hecho que varias personas que le vieron han relatado un intento de suicidio, según sus propias palabras, "por no poder soportar más este tormento". Huang Qi ha sido continuamente golpeado y maltratado por los guardias y por sus compañeros de prisión, lo que ha motivado la deterioración de su salud física y psicológica.

13. El Grupo de Trabajo considera que la dilación que se denuncia que ha sufrido la tramitación del proceso judicial de Huang Qi no parece lo suficientemente larga ni excesiva como para considerarla no razonable y constitutiva de una limitación al derecho reconocido en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se ha acreditado que Huang Qi se desmayó durante la primera audiencia y que, por tanto, fue correcto aplazar el juicio.

14. Las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión deben reunir las siguientes características: ser establecidas específicamente por la legislación interna; resultar plenamente necesarias en una sociedad democrática; y estar motivadas por la necesidad de proteger un legítimo interés nacional de seguridad. Los artículos 103 a 105 del Código Penal de la República Popular China hacen referencia a subvertir el poder del Estado y derrocar el sistema socialista, dejando a las autoridades gubernamentales y a los jueces un amplio criterio discrecional para interpretar dichas normas. El Gobierno no ha aclarado suficientemente al Grupo de Trabajo en qué medida la publicación en Internet de los artículos de Huang Qi y sus páginas web podía ser de tal gravedad para afectar el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

15. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Huang Qi es arbitraria al contravenir el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

16. Por consiguiente, y tras emitir esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tome las medidas necesarias para ser Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y estudie la posibilidad de reformar su legislación para adecuarla a la Declaración Universal y el resto de normas internacionales aceptadas por ese Estado.

Aprobada el 15 de septiembre de 2004

OPINIÓN N° 16/2004 (MYANMAR)

Comunicación dirigida al Gobierno el 5 de marzo de 2004

Relativa a Maung Chan Thar Kyaw

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido en el plazo de 90 días.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Según la información recibida, el Sr. Maung Chan Thar Kyaw, de 15 años de edad y residente en el municipio de Monywa, acababa de terminar sus estudios de secundaria cuando fue detenido el 3 de junio de 2003, acusado de haber lanzado piedras a agentes de policía que estaban protegiendo una zona tras un enfrentamiento con miembros de la Liga Nacional para la Democracia. El altercado tuvo lugar el 30 de mayo de 2003. Pese a haber negado categóricamente dicho acto, fue imputado con arreglo al artículo 333/114 del Código Penal.
5. El 7 de julio de 2003, Maung Chan Thar Kyaw fue declarado culpable por obstrucción a la policía. De conformidad con el párrafo d) del artículo 47 de la Ley del niño, el tribunal municipal de Monywa le condenó a ser internado en la Escuela de Formación Nge Awsan, un centro de detención para menores sito en el distrito de Yangon, donde tiene que permanecer hasta el 4 de octubre de 2005, fecha en que cumplirá 18 años. Según la fuente, cuando cumpla los 18 años podría volver a ser imputado, esta vez como adulto, y transferido a un centro de presos comunes.
6. Según la información recibida, a Maung Chan Thar Kyaw no le asistió ningún letrado, ni tampoco se permitió a sus padres prestarle ayuda. Compareció solo ante el tribunal, lo que contraviene el párrafo c) del artículo 42 de la Ley del niño y el párrafo d) del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Como testigo de cargo compareció el funcionario judicial adjunto del ayuntamiento.
7. La fuente, además, informa de que en el juicio únicamente se tuvieron en cuenta los testimonios de funcionarios públicos. No se convocó a ningún testigo de descargo por parte del acusado. Sin embargo, testificaron los guardianes de la paz y el Presidente del Consejo de Desarrollo, así como cuatro médicos que habían atendido a los policías heridos y que no fueron testigos del presunto incidente.
8. Según la fuente, el tribunal condenó al acusado exclusivamente sobre la base de las descripciones hechas por los testigos de cargo y de un informe de un funcionario de libertad provisional de menores.
9. Según la fuente, su detención, su encarcelamiento y juicio contravienen la Ley del niño y la Convención sobre los Derechos del Niño; estuvo encarcelado desde el momento en que se le detuvo y durante el juicio; fue acusado de delitos que no permiten la puesta en libertad bajo fianza, que no deberían haber sido imputados a un delincuente juvenil. Compareció ante el

tribunal solo; fue condenado sin consultar a sus padres o a otras personas que hubiesen estado dispuestos a testimoniar en su favor y sin tener en cuenta debidamente toda una serie de sanciones menores previstas por la ley.

10. El Gobierno, que tuvo la posibilidad de responder, no pone en tela de juicio las denuncias.

11. El Grupo de Trabajo cree que la asistencia letrada y la asistencia prestada por los familiares en el juicio son derechos fundamentales a la defensa y a un proceso con las debidas garantías, máxime cuando el acusado es un menor. Estos derechos no se observaron en el presente caso ni tampoco el derecho a convocar testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo. La inobservancia de estas normas internacionales en relación al derecho a un juicio con las debidas garantías son tan graves que hace que la privación de libertad de Maung Chan Thar Kyaw tenga un carácter arbitrario.

12. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Maung Chan Thar Kyaw es arbitraria al contravenir los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

13. Por consiguiente, y tras emitir esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Aprobada el 15 de septiembre de 2004

OPINIÓN N° 17/2004 (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 7 de mayo de 2004

Relativa a Ansar Mahmood y Sadek Awaed

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003).
2. El Grupo de Trabajo recibió una comunicación en la que se le informaba que 20 extranjeros (citados con nombres y apellidos) habían sido detenidos en los Estados Unidos de América en las semanas posteriores al 11 de septiembre de 2001. En el momento de la presentación de la petición, la fuente señaló que 17 de esas personas ya habían sido puestas en libertad. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo decidió transmitir al Gobierno únicamente los tres casos de personas que todavía permanecían detenidas.
3. El Grupo de Trabajo toma nota con agradecimiento de la información recibida del Gobierno en relación con los casos del Sr. Ansar Mahmood, el Sr. Sadek Awaed y el Sr. Benamar Benatta (en relación con el Sr. Benatta, véase la opinión N° 18/2004 *infra*).
4. El Grupo de Trabajo, además, observa que el Gobierno le ha informado de que Ansar Mahmood y Sadek Awaed fueron puestos en libertad y deportados de los Estados Unidos el 12 de agosto de 2004 y el 31 de mayo de 2004 respectivamente.
5. La fuente confirmó que Ansar Mahmood fue puesto en libertad y deportado al Pakistán el 12 de agosto de 2004 y que Sadek Awaed fue puesto en libertad y deportado a Egipto en mayo de 2004.
6. Habiendo examinado la información disponible, y sin prejuzgar el carácter de la privación de libertad, el Grupo de Trabajo decide archivar los casos de Ansar Mahmood y Sadek Awaed, de conformidad con el apartado a) del párrafo 17 de sus métodos de trabajo.

Aprobada el 16 de septiembre de 2004

OPINIÓN N° 18/2004 (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Comunicación dirigida al Gobierno el 7 de mayo de 2004

Relativa a Benamar Benatta

El Estado es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido en el plazo de 90 días.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. Habida cuenta de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. La respuesta del Gobierno fue transmitida a la fuente, que facilitó sus comentarios al respecto.
5. El Grupo de Trabajo cree que está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias del caso, teniendo en cuenta las denuncias formuladas y la respuesta del Gobierno sobre ellas, así como de las observaciones formuladas por la fuente.
6. La fuente informó al Grupo de Trabajo de que:
 - a) El Sr. Benatta entró en los Estados Unidos el 31 de diciembre de 2000 con un visado de turista no emigrante, que le autorizaba a permanecer en el país hasta el 30 de junio de 2001;
 - b) El Sr. Benatta intentó entrar en el Canadá para solicitar asilo político. Fue detenido por agentes canadienses y entregado a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos el 12 de septiembre de 2001;
 - c) El Servicio de Inmigración y Naturalización presentó cargos contra el Sr. Benatta como extranjero deportable y se le entregó un documento para que se presentase en Niagara Falls (Nueva York) donde fue entrevistado por agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI). Se le emplazó a que compareciese ante un tribunal de inmigración el 25 de septiembre de 2001. Sin embargo, el 16 de septiembre fue trasladado por el Servicio del Marshal de los Estados Unidos al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (Nueva York).
 - d) El Sr. Benatta fue colocado en "una unidad residencial especial" y se le asignó un régimen de alta seguridad. Durante su reclusión se le mantuvo incomunicado en una celda iluminada durante las 24 horas del día. Se le negó el acceso a un letrado y el guardia le despertaba cada media hora golpeando en su puerta.
 - e) El FBI le descartó oficialmente como sospechoso de actividades terroristas el 15 de noviembre de 2001. Jamás se le comunicó esta decisión. El 30 de abril de 2002 se le asignó por primera vez un letrado.

- f) Durante los meses que permaneció en prisión, el Sr. Benatta compareció ante un juez de inmigración en el propio centro sin un letrado que lo asistiese y sin haber podido acceder a la biblioteca jurídica. Fue trasladado a la sala de la vista con grilletes y esposas.
 - g) El 12 de diciembre de 2001 fue imputado penalmente por posesión de una tarjeta de Seguridad Social falsa y posesión de un justificante de registro de extranjero de los Estados Unidos falso, que había comprado.
 - h) En octubre de 2003 se retiraron los cargos penales contra él, pero permaneció en un centro de detención de inmigrantes al no poder hacer frente a la fianza, de 25.000 dólares. El Sr. Benatta sigue tramitando su asilo e intentando que se le reduzca la fianza.
7. El Gobierno, en respuesta a las acusaciones de la fuente, afirma lo siguiente:
- a) Benamar Benatta entró en los Estados Unidos el 31 de diciembre de 2000, con un visado de no inmigrante del tipo B-1, que le autorizaba a permanecer en los Estados Unidos hasta el 30 de junio de 2001;
 - b) El Sr. Benatta intentó entrar en el Canadá para solicitar asilo político. El Canadá denegó al Sr. Benatta la entrada y lo devolvió a los Estados Unidos el 12 de septiembre de 2001. En el momento de su regreso, se comprobó que el Sr. Benatta estaba en posesión de un número de registro de residente extranjero y una tarjeta de seguridad social falsos;
 - c) El 12 de septiembre de 2001, se entregó al Sr. Benatta un emplazamiento de comparecencia y un aviso de señalamiento de privación de libertad. El Sr. Benatta fue inculcado como extranjero deportable tras haber permanecido en los Estados Unidos más de lo autorizado. El 13 de septiembre de 2001, el Sr. Benatta fue detenido.
 - d) La fecha de la primera vista del Sr. Benatta fue fijada para el 25 de septiembre de 2001. Durante ese tiempo, el FBI examinó las posibles conexiones entre el Sr. Benatta y los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero el 15 de noviembre de 2001 descartó que hubiese tenido cualquier participación.
 - e) El 12 de diciembre de 2001 se ordenó que el Sr. Benatta fuese deportado al Canadá o a Argelia. El Sr. Benatta interpuso un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, que la desestimó el 8 de abril de 2002.
 - f) Asimismo, el 12 de diciembre de 2001, el tribunal del distrito occidental de Nueva York dictó auto de inculpación contra el Sr. Benatta por violar el apartado 6 del párrafo a) del artículo 1028 del título 18 del Código de los Estados Unidos (posesión a sabiendas de un documento de identificación obtenido sin autoridad legal) y del artículo 546 (posesión de una tarjeta de registro de extranjero fraudulenta);

- g) En cumplimiento del auto de detención, el Sr. Benatta fue trasladado para su detención por los agentes del Marshal de los Estados Unidos el 25 de abril de 2002, pero el 3 de octubre de 2003 se desestimaron los cargos presentados contra él. El 6 de octubre de 2003, fue puesto de nuevo a disposición de la Policía de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, que volvió a detenerlo.
 - h) El juez de inmigración volvió a ordenar el traslado del Sr. Benatta a Argelia, pero el 22 de abril de 2004 éste interpuso recurso contra esa decisión.
 - i) El Sr. Benatta no pudo pagar la fianza de 25.000 dólares fijada por la Policía de Inmigración y Aduanas como condición para su puesta en libertad a la espera del resultado del recurso interpuesto.
8. El 3 de septiembre de 2004 el último recurso interpuesto por el Sr. Benatta fue desestimado y la Policía de Inmigración y Aduanas está tramitando su salida de los Estados Unidos.
9. El Grupo de Trabajo considera que:
- a) Existe fundamental coincidencia entre la versión de la fuente y la del Gobierno respecto a la duración y trámites de la detención del Sr. Benatta, quien ha estado detenido más de tres años -desde el día 12 de septiembre del año 2001 hasta la actualidad-, de hecho por la mera infracción administrativa de haber permanecido en los Estados Unidos más de lo que le permitía su permiso de residencia. Así pues, aunque el 12 de diciembre del 2001 el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York dictara una orden de prisión contra el Sr. Benatta por la imputación de posesión de documentación fraudulenta, nunca se presentaron cargos concretos por estos delitos, ni se le citó a comparecer ante el juez de la causa. Dicha imputación resultó mero trámite, ya que cuando se sobreyó el 3 de octubre del año 2003, no había habido ningún tipo de actuación procesal. Mantener a una persona durante casi tres años en prisión provisional sin que se haya tramitado, realmente, proceso alguno por el delito que se le imputaba, es contrario al artículo 9 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
 - b) Aunque tanto la fuente como el Gobierno reconocen que el Sr. Benatta tuvo una audiencia con un juez de inmigración, no hay constancia ninguna de que éste ordenara o confirmara la detención, ya que tal y como el Gobierno ha informado, quien tomó la decisión de mantener detenido al Sr. Benatta fue la Policía de Inmigración y Aduanas. Esta privación de libertad (desde el 12 de septiembre al 12 de diciembre del año 2001, y desde el 30 de octubre del año 2003 hasta ahora) no puede justificarse en forma alguna por el solo hecho de que el Sr. Benatta no fuera capaz de abonar los 25.000 dólares que se le exigieron como fianza el 22 de abril de 2004. La prisión que ha sufrido el Sr. Benatta, por lo menos durante los 14 meses transcurridos desde el 12 de septiembre al 12 de diciembre del año 2001 y desde el 30 de octubre del año 2003 hasta la actualidad, ha significado de hecho una pena de prisión análoga a la que hubiera podido corresponder por la comisión de cualquier delito. En modo alguno la simple infracción administrativa de haber sobrepasado el tiempo autorizado de estancia puede justificar una sanción tan desproporcionada.

- c) Por último, nada dice el Gobierno respecto al régimen penitenciario de alta seguridad (con vejaciones que podrían calificarse de actos de tortura) que de forma totalmente inmotivada se le impuso durante el tiempo que fue investigado por el FBI por su posible conexión con el atentado del 11 de septiembre de 2001. Tampoco aclara el Gobierno por qué no se le notificó al Sr. Benatta ni la investigación que estaba sufriendo por aquel motivo, ni el posterior esclarecimiento que le eximía de cualquier responsabilidad en el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Estas prácticas contrarias al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas debilitaron, sin duda, la capacidad de comprensión y defensa del Sr. Benatta, y son de tal gravedad que confieren a su detención un carácter arbitrario.

10. Habida cuenta de todo lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la opinión siguiente:

La privación de libertad de Benamar Benatta es arbitraria al contravenir los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a las categorías I y III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

11. En consonancia con la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner remedio a la situación, conforme a las disposiciones y principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Adoptada el 16 de septiembre de 2004

OPINIÓN N° 19/2004 (VIET NAM)

Comunicación dirigida al Gobierno el 11 de junio de 2004

Relativa al Dr. Nguyen Dan Que

El Estado es Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1. (Texto del párrafo 1 de la opinión N° 20/2003.)
2. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento al Gobierno por haber entregado información relativa al caso.
3. (Texto del párrafo 3 de la opinión N° 20/2003.)
4. A la vista de las denuncias formuladas, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno. El 22 de junio de 2004, transmitió la respuesta proporcionada por el Gobierno a la fuente, que proporcionó al Grupo de Trabajo sus comentarios. El Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión sobre los hechos y las circunstancias de dicho caso, teniendo en cuenta las denuncias formuladas y la respuesta del Gobierno sobre ellas.
5. Según la información recibida de la fuente, el Dr. Nguyen Dan Que es el fundador del Movimiento No Violento por los Derechos Humanos y un inveterado y pacífico defensor de la democracia y los derechos humanos. El Dr. Que se licenció en la Escuela de Medicina de Saigón a la edad de 24 años y poco después se incorporó al claustro de la Escuela de Medicina de dicha Universidad. Se le concedieron becas de formación que le permitieron trabajar en Bélgica, Francia y el Reino Unido en 1968, 1969 y 1972, respectivamente. Regresó a Viet Nam en 1974 para trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Saigón (Ciudad Ho Chi Minh). Al año siguiente, el Dr. Que fue nombrado Director del Departamento Médico del Hospital Cho-Ray. Años más tarde fue despedido al cuestionar las políticas médicas y sociales del Gobierno.
6. En 1978, el Dr. Que fundó el Frente Nacional para el Progreso, con el propósito explícito de no utilizar la violencia en sus iniciativas para lograr que el Gobierno redujese el gasto militar, invirtiese más en el bienestar de los ciudadanos y celebrase elecciones libres y con las debidas garantías. El 18 de febrero de 1978 fue arrestado acusado de rebelarse contra el régimen y de crear una organización reaccionaria. Permaneció encarcelado sin juicio hasta su puesta en libertad diez años más tarde. Una vez en libertad, el Dr. Que creó, el 11 de mayo de 1990, el Movimiento No Violento por los Derechos Humanos y se convirtió en el primer miembro de Amnistía Internacional en Viet Nam.
7. El 14 de junio de 1990, volvió a ser detenido. Esta vez fue condenado a 20 años de prisión por intentar derrocar al Gobierno. En 1998, fue puesto en libertad al amparo de una amnistía general. Ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz en cuatro ocasiones, y se le han concedido varios premios internacionales de derechos humanos.
8. Según la fuente, el 13 de marzo de 2003 el Dr. Que mandó por correo electrónico una declaración desde un cibercafé en que criticaba las afirmaciones del Gobierno respecto a la libertad de información, así como otra declaración apoyando un proyecto de ley presentado en el

Congreso de los Estados Unidos, conocido como "La Ley sobre la libertad de información en Viet Nam", de 2003. En sus declaraciones, el Dr. Que criticaba al Gobierno de Viet Nam por sus presuntas restricciones a la libertad de información.

9. El 17 de marzo de 2003, el Dr. Que fue arrestado cuando salía de su domicilio en la Ciudad Ho Chi Minh por miembros de la Oficina Municipal de Seguridad Pública y llevado a unas dependencias de dicho cuerpo. Posteriormente, agentes de seguridad procedieron a hacer un registro de su domicilio y se incautaron de una computadora en la que guardaba sus ensayos, así como documentos personales. Tras el registro efectuado en su domicilio, fue trasladado a una cárcel municipal, sita en el número 237 de la calle Nguyen Van Cu, Distrito 1, de la Ciudad Ho Chi Minh, donde permanece recluido hasta la fecha.

10. La fuente confirma, además, que no se han presentado oficialmente cargos contra el Dr. Que. No se ha señalado ninguna fecha para el juicio. Desde su detención ha permanecido incomunicado y se le ha negado el acceso a sus familiares. Se ha prohibido a sus parientes que le proporcionen la medicación que necesita para tratar las úlceras pépticas, los cálculos renales y la hipertensión sanguínea que padece. Debido a la edad y a las enfermedades del Dr. Que, su familia está enormemente preocupada por su salud.

11. El Dr. Que fue arrestado por divulgar declaraciones en Internet en las que se criticaba al Gobierno de Viet Nam por negar a los ciudadanos el derecho a la libertad de información. Según se afirma, las autoridades presuntamente tenían planificado acusar al Dr. Que de delitos contra el artículo 80 (espionaje) del Código Penal de Viet Nam, por intentar transmitir documentos que contenían información crítica con el Estado. La condena para este delito oscila entre 12 años de prisión y la pena capital.

12. La fuente además considera que las autoridades agravaron la violación del derecho del Dr. Que a ejercer su libertad fundamental de opinión y expresión al no reconocerle sus derechos a un juicio rápido, a acceso a asistencia letrada, a que se le informase de los cargos presentados contra él y a ser puesto en libertad a la espera de juicio. El Dr. Que ha permanecido retenido más de un año sin cargos, sin vista previa y sin que se fijase la fecha del juicio. El Dr. Que nunca ha comparecido ante una autoridad judicial para determinar si su privación de libertad se ajustaba a derecho.

13. En su respuesta, el Gobierno afirmó que los derechos de libertad de expresión y libertad de información de los ciudadanos vietnamitas están inequívocamente consagrados en la Constitución y en las leyes y que, en la práctica, se garantiza y se observan cabalmente esos derechos. En relación con el asunto del Dr. Que, el Gobierno asegura al Grupo de Trabajo que la información y las denuncias formuladas en la comunicación no son ciertas: el Dr. Que fue detenido y privado de libertad por haber cometido actos que violaban el artículo 80 del Código Penal de Viet Nam. En consecuencia, será juzgado cuando se complete la instrucción y, como en cualquier otra causa, se le garantizará su derecho a un juicio con las debidas garantías ante un tribunal, en cabal cumplimiento de la ley.

14. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remitió la información proporcionada por el Gobierno a la fuente, para que ésta pudiese hacer observaciones adicionales, como así sucedió. La fuente afirmó que la respuesta del Gobierno no presenta pruebas que refuten su exposición de los hechos e interpretación jurídica. La fuente

añadió que, en su respuesta, el Gobierno afirmó que el Dr. Que fue detenido por haber cometido presuntamente actos que violaban el artículo 80 del Código Penal de Viet Nam. Sin embargo, desde la petición y respuesta el Dr. Que ha sido declarado culpable y condenado por violar el artículo 258 del Código Penal, que prohíbe el abuso de la "libertad democrática para vulnerar los intereses del Estado, los derechos y los intereses legítimos de organizaciones y ciudadanos". La fuente determinó que tras haber permanecido incomunicado durante 16 meses en la cárcel, sin que se le informase de los cargos presentados contra él ni se le permitiese consultar a un letrado de su elección, el Dr. Que fue declarado culpable y condenado, sin poder gozar de asistencia letrada, en un juicio al que sólo pudieron asistir sus familiares.

15. El Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no respondió a las pormenorizadas denuncias de la fuente y se limitó a declarar que no eran ciertas. En su respuesta, el Gobierno afirma que el Dr. Nguyen Dan Que fue arrestado por haber cometido actos que violaban el artículo 80 del Código Penal de Viet Nam, pero ni explicó cuáles eran los actos tipificados penalmente en el artículo 80 ni los hechos que sustentaban los cargos presentados contra él.

16. Sobre esta base, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que los actos de los que se acusa al Dr. Nguyen Dan Que son, en efecto, los señalados en la comunicación, esto es, haber escrito declaraciones en las que se criticaba al Gobierno y expresar su punto de vista sobre la libertad de información en el país, así como haber difundido esas declaraciones por Internet. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que los actos del Dr. Que son únicamente un ejercicio pacífico de su libertad de opinión y expresión, consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que es Parte Viet Nam.

17. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo emite la opinión siguiente:

La privación de libertad del Dr. Nguyen Dan Que es arbitraria, al contravenir el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos sometidos al Grupo de Trabajo.

18. Habiendo concluido que el encarcelamiento del Dr. Nguyen Dan Que es arbitrario, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Viet Nam que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, de conformidad con las normas y los principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprobada el 16 de septiembre de 2004
